

REPORTE N° 13

CONFLICTOS ENTRE POBLACIÓN Y AUTORIDADES O ENTIDADES PÚBLICAS, CONOCIDOS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Al 31 de marzo de 2005

La Defensoría del Pueblo presenta el décimo tercer reporte sobre conflictos de distinta intensidad entre población y autoridades de diferentes entidades públicas con información actualizada al 28 de marzo de este año¹. El reporte da cuenta de 61 conflictos: 32 permanecen activos (52%), mientras que 29 se encuentran en estado latente (48%). En las primeras páginas se presenta un resumen de la información sistematizada, incluyendo información especial sobre las demandas de los agricultores cocaleros y de otros sectores sociales. Más adelante se ofrece una descripción detallada de los conflictos².

I. INFORMACIÓN SOBRE CONFLICTOS ACTIVOS

1. Conflictos activos. La Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 32 conflictos activos en el país. La ubicación de los mismos es la siguiente:

Región	N°	Lugares
Ancash	2	Provincia de Huaraz; distrito de Quillo (Yungay)
Apurímac	1	Provincia de Andahuaylas
Cajamarca	3	Distritos de Cachachi (Cajabamba), Pulán (Santa Cruz) y Chugur (Hualgayoc)
Huancavelica	2	Distrito de Capillas (Castrovirreyna) y Conayca (Huancavelica)
Huánuco	3	Provincia de Yarowilca y Huaycabamba; distrito de Luyando (Leoncio Prado)
Ica	1	Pampa Melchorita (límite con Lima)
Junín	1	Provincia de Satipo (límite con Atalaya)
La Libertad	2	Distrito de Sanagorán (Sánchez Carrión) y Mollepata (Santiago de Chuco)
Lima	3	Distritos de Rimac y Santa Anita; CC Jicamarca (Ate)
Loreto	6	Distritos de Jenaro Herrera y Saquena (Requena), Cahuapanas, Pastaza y Lagunas (Alto Amazonas), Pebas (Mariscal Ramón Castilla)
Piura	4	Provincia de Huancabamba; distritos de Suyu (Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (Huancabamba); Valle de El Chira
Puno	2	Distritos de Asillo (Azángaro) y Unicachi (Yunguyo)
San Martín	2	Distritos de Chazuta y Huimbayoc (San Martín)
TOTAL	32	

2. Casos nuevos. Desde el reporte anterior (emitido el 25 de febrero) se han registrado 3 casos nuevos, los cuales permanecen activos:

¹ Los conflictos incluidos en este reporte son aquellos que han producido al menos alguna de las siguientes situaciones: amenazas a la vida, integridad o salud de las personas; daños a la propiedad pública o privada; afectación al libre tránsito; impedimento del ejercicio de funciones de una autoridad; o la paralización de la prestación de servicios públicos.

² Ver más adelante la descripción de los conflictos activos (páginas 7 – 22) y latentes (páginas 23 – 33).

Nº	Lugares	Actores	Motivo
CONFLICTOS ACTIVOS			
3	Provincia de Andahuaylas, APURÍMAC	Frente de Defensa Regional Agrario, gobierno central	Mayor atención gubernamental al sector agropecuario, especialmente a productores de papa.
7	Conayca, provincia de Huancavelica, HUANCAVELICA	Alcalde Distrital, comunidades campesinas	El Alcalde es cuestionado por una gestión poco transparente y por ausentarse constantemente del distrito.
15	Mollepata, provincia de Santiago de Chuco, LA LIBERTAD	Alcalde Distrital; Asociación Cívica de Defensa de los Intereses de La Libertad	Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos municipales.

3. Casos resueltos en el período. Durante el mes de marzo no se ha resuelto ningún conflicto de los presentados en el reporte anterior.
4. Conflictos latentes: Hasta la fecha existen 29 conflictos en estado latente. Durante el mes de marzo, seis casos han pasado de una situación activa a un estado de latencia.

Lugares	Información general
CONFLICTOS LATENTES	
El Tingo, Hualgayoc CAJAMARCA	Actores: Minera San Nicolás, organizaciones sociales, MEM. Cuestionamiento: La actividad minera contamina la zona correspondiente al poblado de El Tingo.
Kelluyo, Chucuito, PUNO	Autoridad cuestionada: Alcalde Distrital. Cuestionamiento: Presuntos malos manejos de recursos municipales e incumplimiento de obras.
Melgar, PUNO	Autoridad cuestionada: Alcalde Provincial. Cuestionamiento: Abuso de autoridad y gestión poco transparente.
San Gabán, Carabaya, PUNO	Autoridad cuestionada: Ministerio del Interior, DEVIDA. Cuestionamiento: Protesta por la erradicación forzosa del cultivo de coca.
Ciudad de Pucallpa, Coronel Portillo UCAYALI	Actores: Pobladores de Asentamientos Humanos de Pucallpa, Municipalidad Provincial, Colegio de Abogados de Ucayali. Motivo: Adjudicación gratuita de tierras que forman parte del Estado.
CN Chorinashi, Raymondi, Atalaya UCAYALI	Actores: Comunidad Nativa Chorinashi, Consorcio Forestal Amazónico, INRENA, PETT. Motivo: La CN cuestiona una concesión forestal que estaría sobreponiéndose a territorio de la comunidad.

5. Información especial sobre demandas de agricultores cocaleros.

24 de febrero. La DP envió un oficio a la PCM recordando que, a pesar de las denuncias sobre fumigaciones aéreas formuladas por agricultores cocaleros desde octubre de 2004, el gobierno no había realizado una investigación exhaustiva para esclarecer estos hechos. En tal sentido, recomendó la conformación de una Comisión Técnica Intersectorial que desarrolle una intervención coordinada y eficaz, convocando de ser necesario a organismos internacionales especializados en la evaluación de la presencia de sustancias químicas y tóxicas. Con dicho oficio fue remitido un informe sobre el estado del trámite a propósito de las quejas recibidas por la DP respecto de la supuesta fumigación en Uchiza y Pólvora. La DP no recibió respuesta de la PCM, pero sí de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA – Ministerio de Salud) y del Servicio de Sanidad Agraria (SENASA – Ministerio de Agricultura) quienes aceptaron la invitación del DP para coordinar sus actuaciones.

3 de marzo. Los titulares de la DP, SENASA Y DIGESA acordaron elaborar un plan de trabajo conjunto, el cual incluya referencias de laboratorios especializados en estudio de residuos de sustancias químicas en personas, tierras, cultivos y agua. Las entidades

convocadas se comprometieron a entregar los protocolos correspondientes para el recojo, conservación y análisis de muestras. Sin embargo, hasta el momento no lo han hecho indicando que se encuentran en elaboración.

4 de marzo. La PNP solicitó a la OD Ucayali participar en una toma de muestras que realizaría el Fiscal Adjunto del Modulo Básico de Campo Verde en la zona denominada Los Ángeles, donde el 25 de febrero se realizó una erradicación manual de cultivos de hoja de coca, motivando un enfrentamiento entre pobladores y personal del CORAH. El Fiscal fue acompañado por peritos de la Dirección de Criminalística de la PNP y del CORAH. Las muestras fueron enviadas a los laboratorios de la PNP en Lima.

5 – 7 marzo. Una comisión liderada por el congresista Luis Guerrero viajó a distintas localidades de Tocache para investigar las denuncias de fumigación. La DP acompañó a esta comisión integrada por personal de SENASA, autoridades regionales y locales, y representantes de organizaciones sociales. Durante las visitas se recogieron muestras que fueron remitidas a SENASA y al Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental (CICOTOX).

15 de marzo. El Ministerio de Agricultura emitió un comunicado donde concluye, en base al análisis de muestras de tierra y plantas efectuado por SENASA, que no existió fumigación (dichas muestras fueron tomadas por una regidora de Pólvora y el Fiscal de Tocache; esta regidora y la dirigente Elsa Malpartida solicitaron el 14 de febrero a la DP que derive tales muestras a los laboratorios del Estado para el análisis respectivo). El informe de SENASA llega a esta conclusión a pesar de reconocer limitaciones para la realización de estos exámenes, así como problemas en el recojo de las muestras. El Defensor del Pueblo declaró que tal informe no podía ser concluyente y definitivo porque las investigaciones y recojo de muestras no se habían realizado con las precauciones y pautas técnicas debidas, por lo que solo podían considerarse indicios o resultados preliminares de una investigación que debía continuar.

15 – 17 de marzo. Los agricultores cocaleros del valle del río Apurímac inician un paro en protesta por la erradicación forzada de cultivos, y exigiendo al gobierno un proyecto de desarrollo sostenible. Los campesinos bloquearon la carretera Ayacucho – San Francisco; las actividades comerciales paralizaron.

15 – 18 marzo. Con la ausencia de representantes de agricultores del valle del río Apurímac y del Cusco, se realizó el Congreso Nacional de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de Cuencas Cocaleras del Perú (CONAPACCP) en Santa Anita, Lima. En dicho evento, las organizaciones participantes elaboraron un proyecto de ley sobre el cultivo, la comercialización y el consumo de la hoja de coca en el Perú, el mismo que fue presentado ante el Congreso de la República. Asimismo, se produjo una renovación parcial de su dirigencia nacional; Nancy Obregón fue ratificada como Subsecretaria General.

6. Protestas varias. Durante el período reportado, se han desarrollado otras movilizaciones de consideración, entre las que se mencionan las siguientes:

- **Ayacucho.** El 30 de marzo se realizó en esta ciudad un Paro Preventivo Regional convocado por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y el SUTE - Huamanga. . Las demandas planteadas son diversas (nombramiento automático de trabajadores en salud y educación, cancelación del sistema de erradicación forzosa del cultivo de hoja de coca, ampliación del presupuesto del Vaso de Leche y EsSalud, entre otros). El paro fue acatado en Huamanga: los establecimientos comerciales permanecieron cerrados y se restringió el transporte urbano e interprovincial. Pasado el mediodía, los manifestantes se concentraron en la Plaza de Armas. 9 personas fueron detenidas por alterar la tranquilidad pública, entre ellas un menor de edad.

- **Junín.** El 30 de marzo se realizó un paro regional convocado por organizaciones gremiales en rechazo a la privatización de la empresa de agua potable y alcantarillado. La paralización fue total en Huancayo, pero mínima en Chupaca, Concepción, Jauja y Satipo. Diversas manifestaciones se organizaron por toda la ciudad a lo largo de la mañana. Varias personas fueron detenidas cuando intentaron bloquear las vías de comunicación. Al mediodía se realizó una concentración en la Plaza Huamanmarca.
- **Algodoneros.** El 22 de marzo, 5 asociaciones de algodoneros iniciaron un paro indefinido para demandar al Ministerio de Agricultura el cumplimiento de los acuerdos suscritos en una reunión realizada el 7 de marzo, entre ellos una Resolución Ministerial que establezca el pago de S/. 115.00 por quintal de algodón. Los productores bloquearon la Panamericana Sur en distintos puntos a la altura de San Clemente (Pisco), impidiendo el acceso a la carretera Los Libertadores y atacando a vehículos que intentaron desplazarse. La interrupción del tránsito inmovilizó al vehículo que transportaba al SOT2 PNP Jesús Bautista Herrera, trasladado de emergencia desde Puquio donde fue herido por cazadores furtivos de vicuñas; el suboficial falleció por no recibir atención médica oportuna. La PNP intentó, sin éxito, despejar la vía. 17 personas fueron detenidas en estos hechos; el ciudadano Ramón Arucanqui Pérez manifestó haber sido herido de bala por un efectivo policial que no logró identificar. El día 23 por la noche, los algodoneros levantaron el paro luego que la Comisión de Alto Nivel, encabezada por el Director Nacional de Promoción Agraria, aceptara el precio del quintal de algodón solicitado por los agricultores.

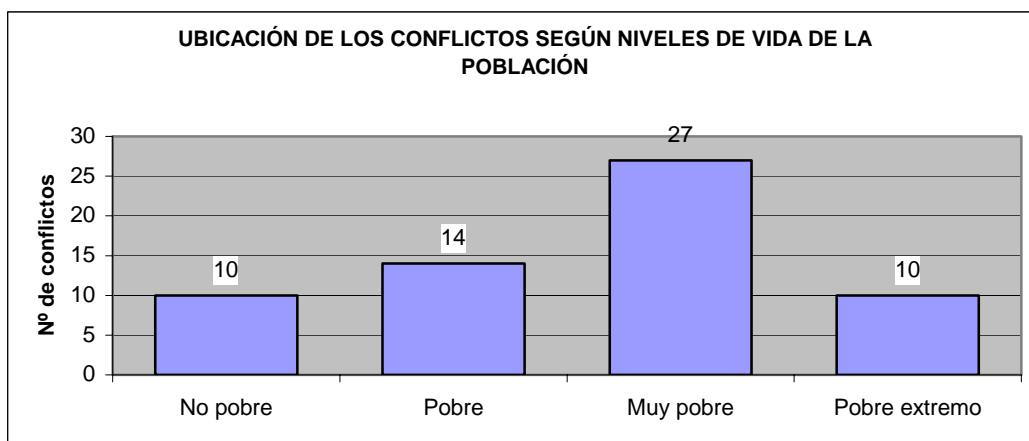
II. INFORMACIÓN CONSOLIDADA SOBRE LOS CONFLICTOS INCLUIDOS EN ESTE REPORTE

1. Situación de los conflictos. De los 61 conflictos incluidos en el reporte³, sólo 8 se iniciaron este año (13%), 44 se iniciaron el año 2004 (72%), y 9 se iniciaron el año 2003 o antes (15%).
2. Escenarios de conflictos. La mayoría de conflictos reportados tienen como actores a las Municipalidades Distritales (74% del total), tal como se presenta en el siguiente cuadro:

Escenario	Breve descripción	Nº	%
Local - comunal	Cuestionamientos a autoridades locales; conflictos entre comunidades	45	74%
Ambiental minero	Enfrentamientos entre poblaciones y empresas mineras	7	11%
Regional	Conflictos por demarcación territorial o acceso a recursos	3	5%
Universidad	Cuestionamientos a autoridades universitarias	3	5%
Gremial	Reivindicaciones laborales o gremiales	2	3%
Cultivo de coca	Cuestionamientos de agricultores de hoja de coca a política gubernamental de erradicación de cultivos	1	2%

3. Situación socioeconómica de las zonas de conflicto. El 72% de los conflictos han ocurrido en áreas rurales (44). Según el nivel de pobreza de su población, 51 conflictos (81%) se han desarrollado en lugares donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza.

³ No se incluyen aquí los conflictos que fueron resueltos antes del 25 de febrero de 2005.



Fuente: FONCODES. Mapa de la pobreza 2004.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

4. Autoridades y entidades cuestionadas. Los 61 casos dan cuenta del cuestionamiento a 88 autoridades, funcionarios y entidades varias. El 49% de autoridades cuestionadas son Alcaldes Provinciales y Distritales; si a ello se suman otros funcionarios la proporción se eleva a 64%⁴. Otras entidades incluidas son: empresas mineras (9%), dependencias del Ministerio de Agricultura (6%), Poder Judicial (5%), Gobiernos Regionales (5%), y Rectores de Universidades públicas (3%).
5. Motivos o causas aparentes⁵. Entre los principales motivos que han generado los conflictos aquí reportados se encuentran los siguientes:

Motivo	Nº	%
Cuestionamiento de decisiones judiciales o administrativas (sentencias judiciales, linderos, adjudicación de tierras, adquisiciones, obras, etc.)	27	44%
Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos económicos	24	39%
Supuesta gestión no transparente (la entidad no brinda información, no rinde cuentas, etc.)	14	23%
No realiza obras	7	11%
Riesgo de contaminación	5	8%
Nepotismo	3	5%

6. Evolución del conflicto.

- En 35 casos (57%) se ha constatado la existencia de procesos jurisdiccionales (Ministerio Público o Poder Judicial), auditorías o investigaciones de organismos competentes (Contraloría General de la República, Jurado Nacional de Elecciones) sobre la gestión de la autoridad cuestionada.

⁴ El 70% de Alcaldes y Regidores cuestionados pertenece a partidos políticos. El restante 30% fue electo por movimientos independientes.

⁵ Normalmente, la población señala la confluencia de varias razones. El cuadro incluye todos los argumentos expresados por la población. La columna de porcentaje establece la proporción de cada uno de estas razones en relación al número total de conflictos (61 en este reporte).

- En 38 casos (62%) se han producido enfrentamientos, agresiones e, incluso, retención de personas.
- En 22 conflictos (36%), la población tomó el local de la institución cuestionada, la Municipalidad en la mayoría de casos. Casi siempre, esta medida de fuerza fue temporal. Sin embargo, en 3 localidades los locales municipales permanecen cerrados, mientras que en otros 3 sólo atienden parcialmente⁶.
- En 20 casos (33%) se han registrado paros y movilizaciones, la mayor parte de ellas pacíficas. Asimismo, en 9 conflictos (15%) se han reportado, como parte de las protestas, bloqueos de vías de comunicación.
- Una vía utilizada para la canalización de estos conflictos ha sido el establecimiento de mecanismos de diálogo entre autoridades y población, como se constata en 30 de los casos registrados (49%). En la mayoría de ellos, se observa una demanda por espacios de negociación que incluyen a entidades ajenas al conflicto pero con capacidad de influir con sus decisiones sobre el desarrollo del mismo (Poder Judicial, Contraloría General de la República, Gobierno Regional, Jurado Nacional de Elecciones, etc.) Por otro lado, cabe mencionar que sólo en 6 de estos casos (10%) se ha empleado el diálogo directo entre pobladores y autoridades.
- Sólo en 6 distritos (10%) se ha empleado el pedido de vacancia del Alcalde⁷, mientras que en otros 7 distritos (11%) se han iniciado procesos de revocatoria⁸.

⁶ Locales municipales cerrados en los distritos de Quillo (Yungay, Ancash) y Sanagorán (Sánchez Carrión, La Libertad) y Saquena (Requena, Loreto), y parcialmente cerrados en la provincia de Yarowilca (Huánuco), y los distritos de Pulán (Santa Cruz, Cajamarca) y Mollepata (Santiago de Chuco, La Libertad).

⁷ Distritos de Jenaro Herrera (Requena, Loreto), Maranganí (Canchis, Cusco), Maquía (Requena, Loreto) y Trompeteteros (Loreto, Loreto); Provincias de Utcubamba (Amazonas) y Cutervo (Cajamarca).

⁸ Distritos de Suyo (Ayabaca, Piura), Asillo (Azángaro, Puno), Kelluyo (Chucuito, Puno) Chazuta (San Martín, San Martín), Maranganí (Canchis, Cusco), Carabamba (Julcán, La Libertad) y Putumayo (Maynas, Loreto).

III. DESCRIPCIÓN DE LOS CONFLICTOS

1. CONFLICTOS ACTIVOS ⁹

ANCASH	
1. Provincia de Huaraz	<p>Actores. Mineras Barrick y Antamina, Comité Regional de Lucha 7 de marzo.</p> <p>Antecedentes. El año 2003, la Minera Barrick Misquichilca S.A. interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal contra las Resoluciones de Intendencia N° 0150140000157, emitidas por SUNAT, que declara fundada en parte el reclamo contra las Resoluciones de Determinación N° 012-03-0002334, 012-03-0002335 y 012-02-0007442, y las Resoluciones de Intendencia N° 012-4-10574/SUNAT y 012-4-10576/SUNAT sobre el pago de impuesto a la renta.</p> <p>Hechos. El 21 de setiembre de 2004, mediante Resolución N° 07112-1-2004, el Tribunal Fiscal declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la Minera Barrick S.A, resolución que no fue apelada por la SUNAT por no contar con autorización del MEF (aparentemente no se cumplía con ninguno de los supuestos señalados en la norma para acudir a la vía contencioso administrativa). El Alcalde Provincial de Huaraz y representantes de algunas organizaciones sociales expresaron su disconformidad con este fallo, criticaron la no autorización del MEF y la opinión a favor de la minera del Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero del MEF. Ante ello, conformaron por ello un Comité de Lucha Regional presidido por el Alcalde Provincial, que ha convocado un paro provincial para el 7 de marzo (amenazan con tomar las instalaciones de la mina Pierina), con la siguiente plataforma de lucha: crear un Fondo con los US\$ 290 millones dejados de pagar a la SUNAT que sirva de contrapartida para obras de impacto ambiental; realizar una auditoria ambiental externa de tercer nivel a ambas compañías mineras, con participación del Colegio de Ingenieros y UNASAM; sanción a funcionarios de SUNAT, Tribunal Fiscal, Ministro de Economía y congresistas de Ancash; e inversión en la región del 50% de utilidades de la compañía Antamina. El 22 de febrero, en reunión convocada por el Prefecto, representantes de entidades públicas (MD, GR, DP), minera Antamina y sociedad civil acordaron conformar una Comisión de Acercamiento a las partes en conflicto, la cual quedó integrada por la DP, la Prefectura y CODISPAS (posteriormente se incorporó un representante del GR). Esta Comisión se reunió el día 23 con el Comité de Lucha; aunque no estuvo presente el Alcalde Provincial, esta organización manifestó su acuerdo con el diálogo en las siguientes condiciones: con altos directivos de las mineras, en base a la Plataforma de Lucha presentada, y en la Plaza de Armas de Huaraz (posteriormente, el Alcalde señaló que solo dialogaran después del paro). El 1 de marzo, la Comisión se reunió con representantes de las mineras, quienes señalaron su disposición a un diálogo sin condicionamientos, y en el que no se discuta la decisión del Tribunal Fiscal. La DP exhortó al MiP y PNP a actuar según sus competencias para prevenir acciones violentas durante el paro.</p> <p>Últimos acontecimientos. El Prefecto solicitó refuerzos policiales. La DP invocó al Comité de Lucha a realizar una protesta pacífica e informó que supervisaría la actuación de las fuerzas del orden para evitar que vulneren derechos de los manifestantes. El paro se realizó los días 7, 8 y 9 de marzo en la ciudad de Huaraz; pobladores bloquearon las carreteras de acceso a la ciudad y las actividades comerciales paralizaron. El día 9, la Comisión de Acercamiento se reunió con las partes, las cuales manifestaron su disposición a establecer una Mesa de Diálogo; también acordaron solicitar a Monseñor Eduardo Velásquez Tarazona, Obispo de Huaraz, que actúe como moderador. El día 11, en una nueva reunión realizada en ausencia del Obispo, los representantes del Comité de Lucha y de las mineras acordaron: aceptar las condiciones propuestas por el Obispo (conformar un equipo técnico de apoyo, otorgarle un plazo prudencial para informarse del tema, mantener el clima de paz). Se programaron reuniones sucesivas entre el Obispo y las empresas Barrick (miércoles 16) y Antamina (jueves 17) para escuchar las propuestas de las empresas e iniciar el diseño de una agenda de trabajo.</p>

⁹ ANR: Asamblea Nacional de Rectores. CC: Comunidad Campesina. CGR: Contraloría General de la República. CN: Comunidad Nativa. CPM: Centro Poblado Menor. DP: Defensoría del Pueblo. GR: Gobierno Regional. JEE: Jurado Electoral Especial. JNE: Jurado Nacional de Elecciones. MiP: Ministerio Público. MD: Municipalidad Distrital. MI: Movimiento Independiente. MEM: Ministerio de Energía y Minas. MuP: Municipalidad Provincial. OD: Oficina Defensorial. ODPE: Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. ONPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales. PCM: Presidencia del Consejo de Ministros. PJ: Poder Judicial. PNP: Policía Nacional.

2. Quillo, Provincia de Yungay	<p>Juan Cruzado Navarro, Alcalde Distrital por el Frente por un Nuevo Yungay (23.36% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece al MI Unión Yungaina (19.56%).</p> <p>Hechos. El 4 de diciembre de 2001, los pobladores tomaron el local municipal y bloquearon las puertas de ingreso, acusando al Alcalde de irregularidades en el manejo presupuestario, peculado, malversación de fondos y abuso de autoridad. Dicha autoridad, que tiene un proceso penal abierto, empezó a despachar en oficinas alquiladas en el distrito, pues la MD estuvo cerrada y con constante vigilancia de la población. A mediados de mayo de 2004, se inició en la Sala Penal de la Corte Superior del Santa, el juicio oral como parte del proceso penal que se le sigue al Alcalde. Durante el año pasado, el Alcalde expresó su intención de abrir el local municipal, lo cual no fue posible por falta de garantías. La población no quería dialogar con su burgomaestre, en especial los residentes de la capital del distrito. En los caseríos y centros poblados se ejecutaron una serie de obras. El Alcalde no fue revocado el 17 de octubre. Durante el mes de enero de 2005, la MD continuó cerrada, al tiempo que un grupo de pobladores enfrenta un proceso penal acusados por haber tapiado el local municipal. No se ha reportado movilizaciones ni enfrentamientos, aunque el cuestionamiento por parte de los pobladores continúa. El proceso penal seguido contra pobladores de Quillo se ha remitido a la Sala Penal de la Corte Suprema del Santa, encontrándose en una fase intermedia. El 19 de febrero se instaló la Mesa Distrital de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y se eligió su junta directiva.</p> <p>Últimos acontecimientos. Aunque la MD continúa cerrada, existe disposición del Alcalde y del Frente de Defensa para reabirla. Se ha propuesto el 15 de abril como fecha de reunión en la que se evaluará los logros alcanzados entre las partes. Los pobladores esperan la sentencia de los procesos penales abiertos contra el Alcalde.</p>
APURÍMAC	
3. Provincia de Andahuaylas	<p>Actores. Frente de Defensa Regional Agrario (FEDRA), productores de papa, Ministerios (Agricultura, MIMDES, Transportes y Comunicaciones).</p> <p>Hechos. Ante el anuncio de un paro regional indefinido convocado por FEDRA en demanda de una mayor atención gubernamental al sector agropecuario (precios justos, declarar en emergencia el acceso vial, exoneración de IGV a productos químicos, entre otros), la MuP convocó el 30 de marzo a una reunión multisectorial para tratar el problema agrario en la región. El día 31, refuerzos policiales llegaron a la ciudad, pese a lo cual grupos de manifestantes bloquearon las vías de acceso a la ciudad y ocuparon la pista del aeropuerto. El 1 de abril se inició el paro agrario. La paralización fue total y unos 5,000 campesinos se movilaron por la ciudad, concluyendo con una concentración en la plaza principal. En la tarde se realizó una reunión multisectorial en la que el representante del PRONAA anunció la distribución de 1,541 TM de alimentos entre las 22,485 familias afectadas por los fenómenos naturales, así como la priorización de compra de 5,000 TM de papa a productores locales. Los dirigentes de FEDRA, que han solicitado al Estado la compra mensual de 7,000 TM de papa, informaron que solo dialogarán con una Comisión de Alto Nivel conformada por representantes de Agricultura, MIMDES y PROVIAS. Las protestas continuaron durante el fin de semana, a pesar de la tregua otorgada al gobierno por los dirigentes de FEDRA; por ello, el 3 de abril fue decretado el estado de emergencia en las provincias de Andahuaylas y Chincheros durante 30 días. El día 5, la PNP recobró el control del aeropuerto de Andahuaylas; en la intervención, un civil fue herido de gravedad, por lo que fue trasladado a Lima. La población espera la llegada de la Comisión de Alto Nivel, cuya conformación estaba siendo discutida por el gobierno central a lo largo de la jornada. La DP ha exhortado a la población a mantener las vías despejadas para permitir la llegada de la comisión; también ha solicitado a la MuP proporcionar el apoyo logístico para el adecuado desarrollo de las negociaciones.</p>
CAJAMARCA	
4. Chugur, provincia de Hualgayoc	<p>Compañía minera Coymolache</p> <p>Antecedentes. El 21 de noviembre de 2001, la MD Chugur emitió la Ordenanza Municipal N° 001-2001-CMDCH que declara dicha zona como intangible y zona reservada protegida de las actividades mineras. La compañía minera Coymolache ha intentado desarrollar el Proyecto Cerro Tantahuatay, pero la ex Alcaldesa de Chugur y la población impidieron a la empresa realizar sus actividades. En junio de 2002, la empresa tuvo que paralizar sus actividades ante las protestas de los pobladores que generaron algunos enfrentamientos.</p> <p>Hechos. La población se opone al proyecto minero por temor a la contaminación, y por ello rechaza los intentos de la empresa de retomar sus actividades. El 20 de agosto, la MD emitió la Ordenanza Municipal N° 001-2004-CMDCH que reitera la intangibilidad de la zona. Durante el mes de Enero la población y sus autoridades han mantenido su cuestionamiento a las actividades de la empresa minera, sin desarrollar acciones en la zona.</p> <p>Últimos acontecimientos. No hay información adicional.</p>

5. Pulán, provincia de Santa Cruz	<p>Actores. Minera Buenaventura, rondas campesinas, Frente de Defensa de los Intereses de Santa Cruz, Municipalidad Distrital de Pulán.</p> <p>Antecedentes. Entre 1999 y 2003 la compañía minera Buenaventura exploró las reservas auríferas de San Pedro Sur y Pampa Verde, proyectando dos tajos a cielo abierto para la extracción de 100 mil onzas de oro por año. Después de los trabajos de exploración, la empresa presentó el estudio de impacto ambiental (EIA) al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y a las MuP de San Miguel y Santa Cruz. El estudio fue observado, por lo que la empresa presentó un nuevo EIA al MEM, el cual se encuentra en evaluación. La Dirección Regional de Energía y Minas informó que se organizaron talleres de participación ciudadana antes y durante la realización del EIA, pero no después de su presentación. Los pobladores afirman que el proyecto minero, al estar ubicado en una cabecera de cuenca, afectará las provincias cajamarquinas de Santa Cruz, San Miguel y San Pablo, a los agricultores del valle Chancay (Lambayeque), y a las microcuencas de Chilal, Santa Catalina, San Pedro, Pisit y Chorro Blanco que alimentan a la central hidroeléctrica de Carhuaquero y al reservorio de Tinajones.</p> <p>Hechos. En abril de 2004, ronderos y 14 comisiones de regantes de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Chancay conforman el “Frente Amplio de Defensa de las Cuencas Hidrográficas San Miguel, Santa Cruz, Chancay – Lambayeque” y solicitan a las MD de la zona la expedición de ordenanzas municipales para declarar la zona como área protegida y reservada municipal. En mayo, los comuneros remitieron un memorial a la empresa pidiendo su retiro de la zona; en respuesta, la empresa recordó el apoyo brindado al desarrollo y manifestó su voluntad de diálogo. Posteriormente, se creó el Frente de Defensa de los Intereses de Santa Cruz, también opuesto al proyecto minero. Los ronderos impidieron la realización de un taller informativo en Pulán organizado por la Dirección Regional de Energía y Minas. A pedido de los ronderos, los Alcaldes de Chugur, Santa Cruz, Utcyacu, Ninabamba, Catache, Pulán, Sexi, Saucepampa, Chancay Baños y Catilluc conformaron la “Asociación de Alcaldes de la Cuenca Alta del río Chancay” que expresa su rechazo a las explotaciones mineras en la cuenca. El 22 de julio, la DP acudió a la zona para promover la instalación de una mesa de diálogo; los ronderos se opusieron a la iniciativa. En octubre, los ronderos de Pulán, Tongod y Catilluc acordaron una movilización hacia la mina el 11 de noviembre. El 5 de noviembre, la DP, en reunión realizada en la sede del GR, alertó sobre esta movilización a autoridades de la PNP, Comisión Ambiental Regional, Comité Multisectorial de Cajamarca y Dirección General de Minería del MEM. El día 16, se realizó una marcha de campesinos hacia el campamento del proyecto La Zanja. En el lugar, dieron un plazo de cuatro horas a trabajadores de la empresa para abandonar la zona. Vencido el plazo y ante la negativa de retirarse, los comuneros tomaron el campamento a pesar que 45 policías intentaron dispersarlos lanzando bombas lacrimógenas. El campamento fue quemado y saqueado, quedando dañadas las unidades móviles y el mobiliario. Un campesino murió al recibir un impacto de bala; personal de la empresa y campesinos resultaron heridos. El Jefe de la Región Policial dispuso el inmediato traslado de cien efectivos. El día 17, los pobladores se replegaron a sus comunidades. Llegaron a la zona representantes del MiP, Subprefectura, MuP y GR. La PNP y la Fiscal realizaron el levantamiento de cadáver, constataron daños e identificaron presuntos responsables. La PNP detuvo a 18 personas, entre ellas dos menores de edad, y las condujo a la Comisaría de San Miguel. Los menores fueron liberados al día siguiente, y los restantes trasladados al Juzgado Mixto. El día 21, la DP, reunida con pobladores y autoridades locales en Tongod, exhortó a emplear mecanismos institucionales. Los días 22 y 23 se realizó un paro provincial para exigir al MEM la nulidad de la autorización de exploración del proyecto minero La Zanja. Una comisión de Alcaldes viajó a Lima a expresar su oposición a la empresa minera ante congresistas de la región y funcionarios del MEM. Este último anunció la conformación de una mesa de diálogo si la población levantaba la huelga. En diciembre, la MD Pulán emite la Ordenanza N° 003-2004-MDP creando el Área de Conservación Municipal Pulán sobre una superficie de 5,500 Has ubicados en la zona de conflicto. El 29 de diciembre, un grupo de dirigentes ronderos y del SUTEP tomó la MD Pulán exigiendo al Alcalde apoyar la lucha por anular las actividades mineras; en el hecho, sustrajeron documentos y enseres y paralizaron las obras de pavimentación de la Plaza de Armas. El Alcalde indicó que ello se produjo porque no aceptó entregar dinero de la MD para solventar la defensa judicial de los ronderos procesados por los sucesos de noviembre. Otros pobladores denunciaron al Alcalde por incumplimiento de obras y mal manejo de recursos. En enero, los Alcaldes de la zona denunciaron haber sido amenazados de muerte por los ronderos. El Alcalde de Pulán y su cuerpo de regidores abandonaron el local municipal. El día 10 las organizaciones se reunieron en Pulán para decidir las acciones a tomar. El 12 de enero, una comisión de Alcaldes de la provincia, acompañados por la congresista Rosa Florián, se reunió con el Defensor del Pueblo para solicitar su intervención. El día 19, la DP visitó Santa Cruz. En Pulán, encontraron que los ronderos rodeaban la MD, permitiendo sólo la atención en dos oficinas y exigiendo que el Alcalde rinda cuentas sobre su gestión. Mientras tanto, los documentos de la MD están bajo custodia en la Fiscalía de Santa Cruz. En esta ciudad se sostuvo una reunión con dirigentes locales, ronderos y un representante del GR. Los pobladores cuestionaron la actividad minera, presentaron sus demandas y manifestaron su disposición a participar en una mesa de diálogo convocada por la DP; esta informó sobre el proceso de decisión para autorizar un proyecto minero y los procedimientos de información y consulta. El día 20, la DP se reunió con el Vicepresidente Regional de Cajamarca quien expresó su disposición a participar en una mesa de diálogo, aunque precisó que el gobierno central es responsable de solucionar el conflicto. Por su parte, el congresista Manuel Bustamante también visitó la zona. El día 23, en Chiclayo, se reunieron representantes de las provincias de Santa Cruz, Chota, Cajamarca, San Miguel y Lambayeque, con representantes del Poder Ejecutivo y DP; en dicha reunión se acordó conformar una comisión para revisar el EIA del proyecto La Zanja, realizar talleres informativos, fiscalización de las actividades de exploración minera, etc. La CGR informó que ha programado una intervención a la MD. El día 28, se realizó una marcha pacífica en Chiclayo en protesta contra los proyectos Cushuro y La Zanja, convocada por el Frente de Defensa de los Intereses de Santa Cruz, rondas campesinas, Junta de Regantes de la Cuenca de Chancay-Lambayeque y otros gremios. En febrero, los ronderos de Santa Cruz desconocieron el acta firmada el 23 de enero en Chiclayo, señalando que sus representantes la habían firmado sin la presencia y aprobación de la población. Por esta razón no se realizó la reunión programada para el 13 de febrero entre representantes de la población, Poder Ejecutivo y DP; más bien, ese día el Frente de Defensa destituyó a Oscar Romero y Horacio Barreto de sus cargos, y eligió un nuevo dirigente (Odelmar Izquierdo Hernández). A pedido del MEM, la DP viajó a la zona; el día 14 de febrero dialogó con representantes del Frente de Defensa, rondas campesinas e Iglesia sobre posibles soluciones al conflicto. Los ronderos, por su parte, han pedido la vacancia del Alcalde; el 15 de febrero se reunieron con representantes del JNE quienes los orientaron sobre los mecanismos a emplear dentro de la legalidad.</p> <p>Últimos acontecimientos. El 22 de marzo, el Alcalde solicitó al MiP la desmovilización de bienes de la MD. Ante el pedido de la Fiscal, el Alcalde aceptó esperar la presentación del informe de la CGR, para no generar enfrentamientos contra la población.</p>
-----------------------------------	---

6. Cachachi, provincia de Cajabamba	<p>Mineras Algamarca y Sullidén Shauindo.</p> <p>Hechos. Ambas compañías mineras sostienen pugnas relacionadas a concesiones mineras y terrenos superficiales en la zona, las cuales se ventilan en el PJ. Ellas han ocasionado enfrentamientos entre comuneros y ronderos que apoyan a una u otra empresa. La población desea que las empresas se retiren de la zona por los riesgos de contaminación. El 11 de setiembre de 2004 los pobladores del CPM Chuquibamba bloquearon las principales vías de acceso que conducen a los campamentos mineros. La vía fue despejada por la PNP. El 28 de setiembre, en reunión convocada por la DP, autoridades regionales, ante presencia de comuneros y dirigentes, se comprometieron a canalizar los reclamos de la población. La DP coordinó con la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental y el Distrito de Riego, para recopilar información sobre la cantidad y calidad de las aguas de las fuentes supuestamente contaminadas y de las que se hallen en peligro de contaminación. También efectúa seguimiento de los compromisos asumidos por las autoridades. El 11 de octubre, el Fiscal Provincial de Cajabamba constató que la compañía Sullidén Shahuindo continúa realizando trabajos de exploración en el caserío San José - Algamarca, a pesar que su autorización venció el 31 de agosto, debiendo rehabilitar las áreas exploradas hasta el 30 de setiembre. La DP solicitó a la Dirección General de Minería que inicie la acción de fiscalización correspondiente. El 10 de octubre, pobladores de ocho caseríos se reunieron en el CPM Malcas y solicitaron que se declare intangible la zona. El 13 de octubre, la DP informó a dirigentes de la zona sobre las gestiones realizadas; se les indicó que continúan las coordinaciones para realizar el análisis del agua en los lugares solicitados, y se les exhortó a mantener el diálogo. Pese a ello, se realizaron movilizaciones sucesivas en Chuquibamba (21 de octubre), Tabacal (22), La Grama (23) y Cajabamba (24). Las marchas fueron pacíficas; sólo en Tabacal, los ronderos detuvieron a un empleado de la minera Sullidén que filmaba la movilización; dicho empleado los denunció posteriormente por secuestro. El 5 de noviembre, en Huangamarca, se enfrentaron trabajadores de ambas mineras. El 9 de noviembre, en Pampachancas, hubo otro enfrentamiento entre pobladores y PNP ocasionando varios heridos. El 29 de noviembre se reunieron en Chuquibamba funcionarios de la Dirección General de Minería con los pobladores. El 17 de enero de 2004, en Cajabamba, el MEM e INRENA realizaron una reunión informativa convocada por el Alcalde Provincial. Según una fuente, los funcionarios limeños indicaron que la reunión se realizaría con 30 personas, lo que provocó el descontento de la población reunida en la Plaza de Armas. La presidenta del Frente de Defensa del Medio Ambiente del Valle de Condebamba solicitó que la charla fuera dirigida a todo el público en la misma plaza. Al no ser aceptada su propuesta (sólo se colocaron parlantes), la población lanzó piedras contra el local municipal y colocaron parlantes para con música a alto volumen para obstaculizar la reunión. Concluida ésta, la población impidió la salida de los funcionarios, que solo pudieron hacerlo luego de explicar a la población que estaban programando una fiscalización a ambas mineras para verificar que no hayan realizado trabajos sin autorización. Representantes de las dos empresas indicaron que habían suscrito un acta por la cual se comprometían a suspender sus actividades. Durante febrero, las empresas mineras han cumplido con el compromiso asumido de paralizar sus actividades hasta que se resuelva su situación jurídica. Sin embargo, aún no se ha coordinado con la población y los funcionarios del MEM, y demás autoridades, la fecha exacta de la fiscalización en dicha zona.</p> <p>Últimos acontecimientos. Durante marzo, el MEM no realizó la fiscalización solicitada por la población y autoridades locales. Aprovechando el paro agrario de la región, el 14 de marzo los dirigentes del valle tomaron la carretera de acceso hacia Cajabamba. Entre sus reclamos se encontraban los petitorios de índole agrario y la declaración de intangibilidad de la zona.</p>
HUANCABELICA	
7. Distrito de Conayca, provincia de Huancavelica	<p>Enrique Cárdenas Cuicapusa, Alcalde Distrital por la Alianza para el Progreso (18.99% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece al Movimiento Descentralista Ahora Huancavelica (16.67% de los votos)</p> <p>Antecedentes. Un regidor solicitó la vacancia del Alcalde en el año 2004, la que fue desestimada por el JNE. El Comité de Vigilancia promovió su revocatoria el año pasado, sin conseguirlo. Posteriormente, la población denunció al Alcalde ante el MiP por los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y otros. En particular se cuestionan diversas irregularidades: gestión poco transparente, ausencia permanente, no realizar una rendición de cuentas, poca información proporcionada a los ciudadanos, negativa y exigencia arbitraria de requisitos para el acceso a la información.</p> <p>Hechos. El 10 de marzo de 2005, la CC organizó una asamblea para que el Alcalde presente un informe de su gestión; el Alcalde no asistió. Los comuneros amenazaron con radicalizar sus medidas y tomar el local municipal. La OD Huancavelica instó a las autoridades comunales y a la población en general a desistir de su propósito explicándoles los canales legales para tramitar sus denuncias. Se acordó convocar el 5 de abril una reunión con el Alcalde y autoridades locales para dialogar sobre practicas de buen gobierno, en especial sobre la rendición de cuentas. La DP ha programado un viaje a la zona el día 31 de marzo para coordinar esta reunión.</p>

8. Distritos de Huachos y Capillas, provincia de Castrovirreyna	<p>Antecedentes. Ambos distritos tienen problemas de límites desde hace años por la disputa de unas 45 hectáreas de terrenos en el sector Pucarumi (altura del Km. 66 de la carretera Chinchá – Villa de Armas). Los enfrentamientos permanentes se han incrementado desde diciembre de 2003. El problema es conocido por la Dirección Regional de Agricultura y el PETT.</p> <p>Hechos. El 13 de junio de 2004, cerca de 200 pobladores de Huachos golpearon y secuestraron al Alcalde de Capillas, Israel Flores Rebatía (Unidad Nacional) y al Presidente de la CC Ccochapampa. Los secuestrados, acompañados de otras personas, habrían bloqueado una carretera cuando los pobladores de Huachos construían un canal de riego. El hecho fue denunciado a la Comisaría de Huachos, por lo que la PNP citó a los acusados para tomar sus manifestaciones. En ese momento, fueron agredidos por unos 200 pobladores, por lo que se refugiaron en la Comisaría, donde sólo había dos efectivos. Un contingente de efectivos policiales se desplazó desde Huancavelica, logrando, luego de un diálogo, rescatar a las personas refugiadas. El 20 de julio, varias ONG y la DP organizaron una reunión en Chinchá en la que participaron autoridades locales, delegados de las comunidades y prensa. En dicha reunión, las partes demandaron que el PETT explique sobre el proceso de adjudicación de los terrenos en conflicto (el Alcalde de Huachos señaló que la Resolución sobre dicha adjudicación no se habría realizado conforme a ley, y que las partes no fueron notificadas). También se informó que la construcción de la carretera Pucarumi – Capillas ha ocasionado la destrucción de canales de riego y daño a cultivos. Estos hechos motivaron procesos judiciales, pues cada parte cuestiona la legalidad de los títulos de propiedad sobre los terrenos que su contraria exhibe. Se acordó, aunque siguieran los procesos iniciados en el Juzgado Mixto de Castrovirreyna, permitir la continuidad de esta obra. No llegó a suscribirse un acta con estos compromisos pues el Alcalde de Capillas y el Presidente de la CC Ccochapampa pidieron consultarlos con la comunidad; pero se acordó que, mientras dure la negociación, las partes evitarán enfrentamientos y no iniciarán nuevas acciones legales para efectuar el desalojo. La ONG CEDINCO se comprometió a gestionar la elaboración de un Proyecto Técnico Legal y a contactar con agencias de cooperación para apoyarles en la negociación de proyectos de infraestructura. El 2 de agosto, comuneros de Capillas atacaron a similares de Huachos en la localidad de Pucapampa – Buena; tres heridos fueron evacuados al Hospital de Chinchá; todos fueron dados de alta al día siguiente. El 3 de agosto hubo un nuevo enfrentamiento, esta vez iniciado por comuneros de Huachos, con el saldo de un muerto. Otras nueve personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. El Alcalde de Capillas y el Fiscal Adjunto solicitaron a la Región Policial de Ica – Chinchá el traslado de una mayor dotación de efectivos policiales, pero no fueron atendidos porque la zona en conflicto no se encuentra dentro de la jurisdicción de la mencionada unidad policial. El 4 agosto, personal de la DP se entrevistó con unos 60 comuneros de Capillas y con unos 80 de Huachos, pero ninguna de las partes cedió posiciones. En el lugar se encontraban tres efectivos policiales de la Comisaría de Huachos, en tanto que el representante del MiP y la PNP se replegaron a Chinchá luego del levantamiento del cadáver de la persona fallecida. El Jefe de la Región Policial - Huancavelica informó a la DP que había enviado a tres efectivos policiales como refuerzo, y que el fin de semana enviará diez más, con la compañía de un representante del MiP. Esta respuesta, que no consideraba la gravedad del problema, motivó que la DP enviara un oficio al Jefe de la Octava Dirección Territorial de la PNP recomendando disponer a la brevedad la presencia de un contingente policial suficiente para superar la situación de conflicto. El 6 de agosto, la DP, el GR Huancavelica y dos ONG promovieron una reunión presidida por el Presidente Regional e integrada por Alcaldes y delegados de ambos distritos. Allí se acordó instalar una Mesa de Diálogo, encargándose a la DP la elaboración de su reglamento. Asimismo, las partes se comprometieron a continuar la construcción de la carretera Pucarumi – Capillas, no impedir el tránsito de vehículos, y respetar el fallo judicial que se emita. El GR solicitará opinión técnica legal de los expedientes alcanzados por ambas comunidades a dos instituciones especializadas e imparciales. Las partes no aceptaron dejar libre el área de conflicto porque no tenían clara la extensión de la zona, por lo que se pedirá apoyo técnico al PETT. El Jefe de la Región PNP Huancavelica informó que se instalará un destacamento policial permanente en el lugar y que rotará a los efectivos de la Comisaría de Huachos. El 21 de agosto se reunió la Mesa de Diálogo en Chinchá. Previamente la DP elaboró su reglamento y la PNP instaló un destacamento con un patrullero y doce efectivos. Ambos grupos se han replegado a una distancia de 1.5 kilómetros, quedando el destacamento en un punto intermedio. Se instaló también una brigada de salud para prestar atención a los heridos y servicio integral a los comuneros. El 4 de octubre, pobladores de Huachos tomaron la carretera Chinchá – Villa Armas impidiendo el retorno del Alcalde de Capillas a su localidad durante tres semanas. El 10 de octubre, comuneros de ambas CC se enfrentaron nuevamente en el sector de Buenavista, con un saldo de cinco heridos.</p> <p>Últimos acontecimientos. No hay información adicional</p>
HUANUCO	
9. Provincia de Huacaybamba	<p>Silvio Salazar Príncipe, Alcalde Provincial por Unión por el Perú – Frente Amplio (26.27% de los votos); obtuvo 4 regidores. El quinto pertenece a Perú Posible (25.15%).</p> <p>Hechos. En noviembre de 2004 la población del distrito desalojó al Alcalde de sus funciones, acusándolo de negarse a cualquier forma de fiscalización. En diciembre, en el centro de la ciudad aparecieron pintas y banderolas alusivas al PCP y la lucha armada (los pobladores señalan al Alcalde como responsable de estos hechos). El burgomaestre, acompañado por 30 efectivos PNP, intentó reingresar al despacho municipal, sin lograrlo por la oposición de un grupo de pobladores provistos de palos y piedras. El 16 de enero de 2005, el Alcalde denunció ante el MiP a 60 pobladores de dicha localidad por el delito de terrorismo. La DIRCOTE ha solicitado la presencia de los denunciados en Huánuco; por intervención de la DP, la PNP viajó más bien a Huacaybamba para efectuar las diligencias correspondientes. A fines de enero, la DP visitó la zona donde se entrevistó con regidores y supervisó el proceso judicial seguido contra el Alcalde (Instrucción N°018-2004) por presunto delito contra la administración pública, el mismo que espera opinión del MiP. A fines de febrero, en sesión extraordinaria, el Concejo Municipal declaró la vacancia del Alcalde por ausencia de la jurisdicción sin autorización e inasistencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas.</p> <p>Últimos acontecimientos No hay información adicional.</p>

<p>10. Luyando (Naranjillo), provincia de Leoncio Prado</p>	<p>Gunder Laffosse Grijalva, Alcalde Distrital por el Movimiento de Integración Alto Huallaga (18.66% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece a Unidad Nacional (13.86%).</p> <p>Hechos. El 17 de noviembre de 2004, pobladores de Luyando (Naranjillo) tomaron el local de la MD en protesta por la falta de celeridad del trámite de la denuncia contra el Alcalde por presuntos delitos de peculado, malversación de fondos, falsificación y otros. El 18 de noviembre, la DP exhortó a los pobladores a desocupar el local municipal. El 22 de noviembre, se programó una reunión con población y autoridades locales, pero esta no se realizó por la falta de colaboración de los regidores y los miembros del Frente de Defensa. La población continuó intentando la vacancia del Alcalde, pero no lograron convencer a los regidores para votar a favor de esta medida. La sesión extraordinaria convocada para tratar el tema no se realizó porque la población demandaba que el Alcalde abandonara el cargo. Hubo dos nuevos intentos (22 de octubre y 12 de noviembre), pero no se pudieron desarrollar las sesiones por inasistencia del Alcalde. La DP recomendó a la Primera Sala Penal de Huánuco celeridad en el proceso que se le sigue al Alcalde. El 3 de enero de 2005, el Alcalde, en compañía de unas 20 personas, ingresó al local municipal para tomar posesión de su cargo. Una hora después, unas 200 personas provistas de palos y piedras cercaron el local municipal. La PNP y la Fiscal ingresaron a la MD, pero no pudieron evitar que la población apedree el local, a pesar del diálogo que intentaron la PNP, MiP y DP. En la tarde, con refuerzos de Tingo María, la PNP rescató al Alcalde y a sus acompañantes; sin embargo, los proyectiles lanzados por la población produjeron lesiones en algunos efectivos policiales y dañaron el vehículo de la PNP. El 4 de enero, el MiP realizó una inspección para determinar los daños ocasionados y determinar la seguridad en la zona. Las investigaciones que involucran al Alcalde y a pobladores se han ampliado por 60 días más. La MD funciona con normalidad, aunque el Alcalde ha acondicionado una oficina de atención en el caserío de Mapresa. El día 22, pobladores de Naranjillo realizaron una marcha pacífica a Tingo María, realizando plantones ante los locales del PJ y MuP, exigiendo celeridad en el proceso judicial abierto contra el Alcalde y la revocatoria del mandato de comparecencia.</p> <p>Últimos acontecimientos. No hay información adicional.</p>
<p>11. Chavinillo, Provincia de Yarowilca</p>	<p>Abel Soto Ponciano, Alcalde Provincial por el MI Luchemos por Huánuco (22.91% de los votos), obtuvo 5 regidores. Los otros dos pertenecen a los MI Trabajemos por Yarowilca (15.95%) y Yarowilca Renace (10.91%).</p> <p>Hechos. La población cuestiona el resultado de las elecciones municipales. No ha dejado ingresar al Alcalde desde el año 2002. El Alcalde y sus regidores sesionan en localidades colindantes de Obas y Choras. Se originaron enfrentamientos que ocasionaron la muerte de varias personas, entre ellas un regidor. La DP se reunió por separado con pobladores y autoridades. El 4 de abril de 2004, en asamblea comunal, los primeros aceptaron dialogar con el Alcalde. Después, en Huánuco, Alcalde y regidores acordaron que la Oficina de Registro Civil volviera a funcionar en Chavinillo, lo cual se produjo a partir del 26 de abril. Mientras tanto, continúa un proceso penal seguido contra el Alcalde. El 11 de junio, la DP informó a la población de Chavinillo sobre la decisión de la CGR de realizar un examen especial de auditoría a la Municipalidad en el segundo semestre, que abarcará desde enero de 2001 hasta diciembre de 2003. La población designó a sus representantes ante la Comisión de Diálogo, para definir con el Alcalde y sus regidores el funcionamiento de los servicios municipales, pero esta no llegó a reunirse. La población informó que el Alcalde ha denunciado por diversos delitos a algunos de sus opositores, y que el PJ ha ordenado el pago de cauciones onerosas. El 7 de julio, en reunión convocada por el congresista Santos Jaimes en el Congreso, y en presencia de diversas entidades públicas (JNE, PCM, CGR, CND y DP), autoridades locales y dirigentes sociales de la provincia discutieron alternativas de solución al conflicto (el Alcalde no asistió). Se suscribió un acta con los siguientes acuerdos: la Municipalidad brindará un informe económico de la gestión actual; se solicitará que la intervención de la CGR cuente con la presencia de veedores de la sociedad civil; se designará una Comisión de Fiscalización de la gestión municipal con presencia de la sociedad civil; se solicitará que los servicios básicos (Vaso de Leche, Obras Públicas) funcionen nuevamente en el local municipal; ambas partes respetarán mutuamente la integridad y seguridad de los ciudadanos. Se programó una siguiente reunión en agosto. Actualmente, en la MuP atienden la Oficinas de Registro Civil y labora personal administrativo. El diálogo con la población y las autoridades se encuentra paralizado. Según el expediente N° 87-00 y 1584-03, con fecha 11 de febrero de 2005, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Háuco Pasco, emitieron sentencia en contra de Abel Soto Ponciano, absolviéndolo de los delitos de peculado, malversación de fondos y colusión, por los hechos del mercado central de Cavinillo así como del hostel y Comedor Municipal, y del programa del vaso de leche. Por otro lado, condenó al mismo como autor y responsable de los delitos de peculado y colusión en agravio de la municipalidad provincial de Yarowilca y el Estado, por los hechos del programa del vaso de leche, a cuatro años de pena privativa de libertad e inhabilitación, por el término de tres años, fijando el pago de la suma de dinero ascendente a cinco mil nuevos soles, por concepto de reparación civil, que deb de pagar el sentenciado a favor de los agraviados, a razón de tres mil quinientos nuevos soles para el Concejo Municipal agraviado y mil quinientos nuevos soles a favor del Estado; pena principal cuya ejecución se suspende para el sentenciado por el plazo de dos años bajo el cumplimiento de reglas de conducta. Esta sentencia fue apelada ante la Corte Suprema de la República.</p> <p>Últimos acontecimientos. No hay información adicional.</p>

ICA Y LIMA	
12. Pampa Melchorita, en el límite de las provincias de Cañete (Lima) y Chíncha (Ica)	<p>GR Ica y MuP Chíncha vs. GR Lima Provincias y MuP de Cañete.</p> <p>Antecedentes. La empresa PERU LNG decidió adquirir un terreno de 522 hectáreas para construir una planta de licuefacción de gas para su exportación, ubicado en Pampa Melchorita (km 169 de la Panamericana Sur), entre las provincias de Cañete y Chíncha. Como se trata de terrenos eriazos que pertenecen al Ministerio de Agricultura (es decir, destinado a fines agrícolas), el área tuvo que ser transferida a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). El 27 de julio del 2003, una resolución autoriza la venta del terreno de la SBN a Hunt Oil para la construcción de la planta. El Presidente del GR Lima, la SBN y representantes de la empresa acordaron que los terrenos se transfieran al GR Lima en el marco del proceso de descentralización para que luego estos se los transfieran al consorcio.</p> <p>Hechos. Las normas emitidas por la MuP Chíncha (Ordenanza Municipal N° 043-2003-MPCH, del 22 de diciembre de 2003) y el GR Lima (Ordenanza Regional N° 001-2004-CR/RL del 7 de enero de 2004, que declara ineficaz la anterior) generaron un clima de enfrentamiento, pues la MuP Chíncha sostiene que la mencionada zona está dentro de los límites de Chíncha. El 8 de abril de 2004, la Dirección Nacional de Demarcación Territorial de la PCM (DNDT-PCM) emitió un informe técnico que establece la quebrada de Topará como límite entre las provincias de Cañete y Chíncha, por lo que la zona en litigio queda incluida en Cañete. El 3 de mayo se produjo un enfrentamiento entre los pobladores de Nuevo Ayacucho, ubicado en la zona en conflicto, por lo que un grupo de moradores solicitó resguardo policial a la Subprefectura de Chíncha. La PNP – Ica instaló una comisaría móvil en el lugar con 12 efectivos. El 11 de mayo, el Alcalde de Chíncha convocó a una marcha, en coordinación con un grupo de Alcaldes Distritales, distintos gremios (CGTP, SUTE), pobladores de Chíncha y los congresistas Miguel Devescovi y Juan Ramírez Canchari. La marcha por la carretera Panamericana fue pacífica y se disolvió luego de una coordinación entre el Alcalde de Chíncha y la PCM. El 5 de junio, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) convocó al Alcalde de Chíncha a una reunión con organizaciones sociales para exponer su punto de vista. El 7 de junio, funcionarios de la DP sostuvieron una reunión con la DNDT-PCM para conocer su posición y sugerir que se informe a la población el contenido del Informe 001, cuestionado por las autoridades de Chíncha. El 10 de junio, el Presidente Regional de Ica convocó a una reunión de emergencia a autoridades de Ica, Alcalde de Chíncha, organizaciones de base, y congresista Miguel Devescovi. Allí se conformó el Frente Regional de Defensa Territorial, presidido por el Presidente Regional, e integrado por Alcaldes Provinciales, gremios y organizaciones sociales. Este Frente convocó un Paro Regional de 24 horas para el día 22 de junio que fue acatado en toda la región (incluyendo instituciones públicas) con manifestaciones en todas las provincias de Ica lideradas por los respectivos gobiernos locales. En Chíncha, los manifestantes bloquearon la carretera desde la entrada de Grocio Prado hasta la salida de Chíncha Baja. No se reportaron detenciones ni acciones violentas. El día del paro, la PCM remitió al Congreso de la República un proyecto de ley, lo que causó malestar en la población por la coincidencia de fechas; por su parte, el congresista Ramírez Canchari informó que el Congreso ha conformado una comisión para revisar la actuación de la Oficina de Demarcación Territorial. La Comisión de Descentralización y Modernización del Estado del Congreso de la República archivó el proyecto de Ley que fijaba los límites territoriales entre Chíncha y Cañete al considerar sesgado el informe de la DNDT-PCM. El congresista Jorge del Castillo planteó que la planta de licuefacción del proyecto sea construida en la zona en conflicto considerando que la mano de obra vendrá de ambas provincias, aunque los tributos municipales serán cobrados por la MuP Cañete. Esta propuesta ha sido aceptada por las Municipalidades, pero el Frente de Defensa de los Intereses de Chíncha no lo ha aceptado. El 18 de octubre, congresistas de la Comisión Pro Inversión, Presidentes Regionales de Lima e Ica, Alcaldes Provinciales de Chíncha y Cañete y representantes de la empresa Perú LNG, suscriben un acta. En ella, entre otros temas, la Comisión Pro Inversión se compromete a proponer un proyecto de ley de alcance general que permita solucionar disputas por predios ubicados en zonas cuya jurisdicción sea reclamada por más de un gobierno regional. El 5 de noviembre se publica la Ley N° 28374 que establece un mecanismo de distribución de recursos en el caso de adjudicación directa de predios en el ámbito de desarrollo de proyectos de interés nacional (como la instalación y operación de plantas de procesamiento de gas natural). En diciembre, el Congreso archiva el proyecto de ley N° 10861/2003-PE que establece la delimitación territorial entre Chíncha y Cañete. El Presidente Regional de Lima presenta una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 28374 que dio solución al problema por demarcación, decisión que es cuestionada por su partido. El 10 de enero de 2005, la Junta de Portavoces del Congreso de la República actualizó el proyecto de Ley que había sido archivado. El 17 de enero se realizó un paro en Chíncha en protesta por esta decisión. El Tribunal Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Presidente del GR Lima, contra los efectos de la Ley N° 28374, norma que garantiza el inicio de la construcción de la planta para la exportación de gas, hasta que se definan los límites entre Chíncha y Cañete.</p> <p>Últimos acontecimientos. El TC declaró infundado la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley N° 28374 presentado por Miguel Angel Mufarech en representación de 5,716 ciudadanos, por lo que dicho artículo mantiene su validez. El fallo, además, exhorta al Congreso de la República a emitir la ley de demarcación territorial en el plazo más inmediato posible para otorgar estabilidad jurídica a la inversión.</p>

JUNIN	
13. Provincia de Satipo (límite con la provincia de Atalaya, región Ucayali)	<p>Actores. MuP de Atalaya (Ucayali) y Satipo (Junín).</p> <p>Antecedentes. Desde hace más de diez años, la población asháninka reclama la delimitación entre las provincias de Satipo y Atalaya. La imprecisión de linderos ha causado constantes fricciones entre pobladores de ambas provincias. A lo largo del tiempo se han suscrito varias actas de acuerdo mutuo con intervención de autoridades locales y regionales.</p> <p>Hechos. El 28 de julio de 2004, grupos de indígenas bloquearon varias vías de comunicación de la provincia: unos 700 en la carretera y la vía fluvial que conecta Satipo con la CN Puerto Ocopa (tramo de la CN Gloriabamba y Puente Boca Satipo); otro grupo en Otica, a orillas del río Tambo, obstaculizando el tránsito de embarcaciones; otros 200 nativos en Poyeni, también a orillas del Tambo. Los nativos reclamaron el cumplimiento de mil hectáreas de linderos que, afirman, fueron invadidas por pobladores de Atalaya. La Central Asháninka del Río Tambo tomó esta decisión luego que el Alcalde de Atalaya intentó inaugurar una carretera que atraviesa la provincia, violando un acuerdo firmado entre ambas regiones de no realizar obras en la zona en conflicto. Otro motivo habría sido el asesinato de un poblador indígena de la CN Impanakiari el 19 de julio, en el puente Chismichorro, punto de referencia para la delimitación, perpetrado supuestamente por pobladores de Atalaya. El 6 de agosto se reunieron el Presidente de la Región Junín, el congresista Alcides Chamorro, y representantes de PCM, CND, Prefecto, Ministerios de Salud, Agricultura (INRENA, PETT), Educación y DP. Acuerdos: la PCM elaborará el informe final de delimitación territorial y tendrá en cuenta el informe técnico de los GR Junín y Ucayali y el Convenio 169 de la OIT; el PETT titulará 27 CN y 1,000 expedientes individuales de colonos; la Dirección Regional de Agricultura ubicará más profesionales en la Sede Agraria de Río Tambo; la Dirección Regional de Salud elaborará el expediente técnico para ampliar el Puesto de Salud de Puerto Ocopa; Provías Nacional y el congresista Chamorro solicitarán a la CGR la auditoría de la carretera Puerto Ocopa-Atalaya, pues carece de expediente técnico y estudio de impacto ambiental. Las autoridades asháninkas decidieron suspender temporalmente el paro, otorgando un plazo prudente para el cumplimiento de los acuerdos. El 14 de setiembre, una delegación de asháninkas estuvo en Lima para exigir la solución definitiva del conflicto. En respuesta, una delegación de la Comisión de la Amazonía y Asuntos Indígenas y Afroperuanos del Congreso viajó a la zona del conflicto, comprometiéndose a participar en el diálogo para solucionar la controversia. El 20 de setiembre, autoridades de ambas provincias, con apoyo de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM y en presencia de funcionarios de la DP y Ministerios de Agricultura e Interior, acordaron poner fin al diferendo limitrofe aceptando el informe técnico emitido por dicha entidad. Sin embargo, el 22 de setiembre se realiza un paro regional convocado por el Frente de Lucha de los Intereses de Ucayali que fue acatado de manera parcial en Pucallpa y total en la provincia de Atalaya y en el Gran Pajonal. Las CN cuestionan el informe de la PCM que divide sus territorios en el sector del CPM Oventeni (río Unini). A fines de setiembre, los nativos asentados en la zona limitrofe y el Alcalde de Atalaya solicitaron una consulta popular para definir el tema. Por su parte, los jefes nativos del río Tambo acordaron en el congreso asháninka defender los límites de la provincia de Satipo. Durante enero, la Dirección Nacional de Demarcación Territorial de la PCM, a través de una mesa de diálogo, logró un acuerdo de límites con participación amplia de las partes. Este informe no se convirtió en proyecto de Ley porque se requiere que ambas provincias efectúen el saneamiento de sus territorios. Sin embargo, el informe técnico fue cuestionado por congresistas de Ucayali quienes solicitaron la realización de una consulta popular para definir la controversia (las autoridades de Junín están de desacuerdo con esta propuesta). La DP efectúa el seguimiento del proceso de demarcación definitiva a través de su Programa de Comunidades Nativas.</p> <p>Últimos acontecimientos. En febrero, el GR Junín, mediante Ordenanza Regional N° 016-GRJ/CR, confirmó la definición de límites territoriales aprobada por la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM. Las autoridades y representantes de Ucayali no están de acuerdo con dicho informe, por lo que el Congreso deberá definir la controversia mediante una Ley.</p>
LA LIBERTAD	
14. Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión	<p>Gonzalo Polo Solano, Alcalde Distrital por el Partido Aprista Peruano (25.1% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece a Unión por el Perú – Frente Amplio (19.61%).</p> <p>Hechos. Los pobladores del distrito tomaron el local municipal por las presuntas irregularidades en la administración municipal. En estas acciones el Alcalde, agrediendo a los regidores. Luego de la intervención de la PNP, se logró suscribir un acuerdo por el que el Alcalde se compromete a tomar medidas administrativas que hagan transparente su gestión. A pesar de estos acuerdos, el burgomaestre ha abierto una oficina en Huamachuco, capital de la provincia, desde donde dirige su gestión. La DP ha constatado que los compromisos asumidos por el Alcalde no han sido cumplidos en su totalidad. En octubre de 2004, el Alcalde informó al JNE que convoca sesiones de Concejo en el caserío de Chugurbamba y en el CPM Hualasgoday, pero estas no se realizan por la inasistencia de tres regidores. Por ello, solicitó su vacancia, la misma que fue declarada improcedente por el JNE el 13 de enero de 2005 por no haber seguido los procedimientos establecidos. La CGR informó en febrero que, ante el alejamiento del titular de la MD, no puede obtener información sobre la administración de los recursos municipales. El día 9, personal de la DP trató de entrevistarse con representantes del Frente de Defensa, sin resultados positivos.</p> <p>Últimos acontecimientos. La situación se mantiene en calma. Actualmente los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Sanagorán vienen recopilando firmas de los pobladores del distrito a fin de promover la revocatoria de la autoridad edilicia y algunos regidores.</p>

15. Mollepata, provincia de Santiago de Chuco	<p>Einer Rubén Agustín Minchola, Alcalde Distrital por el partido Acción Popular (18.9% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece a Santiago al Desarrollo (18.08 % votos).</p> <p>Hechos. El 10 de febrero de 2005, la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses de La Libertad presentó una queja ante la DP acusando al Alcalde por supuestas irregularidades en la gestión municipal. El 16 de febrero, la OD La Libertad solicitó al Jefe de la Oficina Regional de Control conformar una comisión auditora para investigar la presunta utilización indebida de bienes y recursos de la MD. El 26 de febrero, el local municipal fue tomado por pobladores de la localidad y caseríos del distrito, en protesta por las mencionadas irregularidades y por la inacción de las instituciones a las que habían presentado su denuncia. El 7 de marzo, el Gobernador informó que la MD brinda atención al público de forma parcial, en tanto el despacho de Alcaldía y la Oficina de Tesorería están cerradas. Un grupo de pobladores hace guardia en la Plaza de Armas para impedir el ingreso del Alcalde.</p>
LIMA	
16. Distrito de Santa Anita, provincia de Lima	<p>Actores. MD Santa Anita y Asociación Nacional de Productores y Comerciantes "Mercado Mayorista de Santa Anita".</p> <p>Hechos. El Mercado de Santa Anita, ubicado a la altura del kilómetro 3.5 de la Carretera Central, es propiedad de la Empresa de Mercados Mayoristas S.A. (EMMSA). El terreno ha sido ocupado ilegalmente por la Asociación Nacional de Productores y Comerciantes "Mercado Mayorista de Santa Anita", quien además de usufructuarlo ha construido puertas y módulos de material noble en su interior. El año 2003, mediante Resolución de Alcaldía N° 285 y Resoluciones de Concejo N° 006 y N° 009, la MD dispuso la clausura de todas las puertas y la paralización inmediata de las construcciones civiles irregulares allí efectuadas, iniciándose el trámite de ejecución coactiva mediante Expediente N° 505-2003-C. En la vía civil, la MD Santa Anita obtuvo autorización judicial para efectuar la medida de parte del 56° Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, medida que no ha podido ejecutar por la constante y violenta oposición de los comerciantes. En la vía penal, se ha abierto instrucción contra los dirigentes de la mencionada Asociación por los delitos de usurpación agravada y daños en agravio del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) y EMMSA. El PJ intentó realizar una inspección judicial al terreno, pero ella fue impedida en forma violenta por los denunciados.</p> <p>Últimos acontecimientos. El 10 de marzo se produjo un enfrentamiento entre integrantes de la Junta Directiva de la asociación de comerciantes por la administración del mercado, contando con la participación de asociados que apoyaban a las dos partes en conflicto. En el enfrentamiento fue herido de bala Tracucantonio Talizaya Larico (30), quien fue internado de emergencia en el hospital Hipólito Unanue. Al cierre de este reporte, la administración del Mercado de Santa Anita se encuentra bajo responsabilidad de Porfirio Zárate Zárate.</p>
17. Distrito del Rimac, provincia de Lima	<p>Roberto Morales, Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).</p> <p>Hechos. Estudiantes de la UNI acusaron al Rector de cometer irregularidades en la administración de fondos provenientes de las actividades que realizan diferentes facultades. Igualmente, lo acusan de permitir el ejercicio de funciones de dos Decanos, a pesar que su elección fue impugnada por el Comité Electoral. Otros reclamos incluyen la democratización de la universidad y la modificación del Reglamento de Elecciones para permitir la revocatoria de autoridades. El 30 de junio, alumnos de la UNI tomaron el campus solicitando la suspensión de la Asamblea Universitaria convocada para el 2 de julio con la intención de elegir Rector y Vicerrector. El 1 de julio en la madrugada, la DP llegó a la Universidad ante el anuncio de un desalojo violento, pues durante la mañana se habían producido enfrentamientos entre la PNP y los estudiantes. El 2 de julio, la Asamblea Universitaria reeligió a Roberto Morales como Rector, lo cual produjo un nuevo reclamo y una huelga de "lápices caídos" que fue apoyada por docentes. Ese día, la DP se entrevistó con las autoridades (se les sugirió dialogar con los estudiantes para conocer sus demandas y evaluar la posibilidad de soluciones) y con miembros del Tercio Estudiantil (se les instó a deponer la medida de fuerza para evitar un desalojo violento que pusiera en riesgo la vida y seguridad de los estudiantes). Horas más tarde, los alumnos fueron desalojados por la PNP con bombas lacrimógenas. 87 personas fueron detenidas. La DP solicitó al MiP y PNP que su actuación no vulnera los derechos constitucionales. Luego del desalojo, se supervisó el respeto de los derechos de los estudiantes detenidos. El 11 de agosto, un grupo de estudiantes inició una huelga de hambre. El 6 de setiembre, unos 3,000 alumnos volvieron a tomar la sede de la UNI solicitando audiencia ante la Comisión nombrada por la ANR. El 13 de setiembre, la PNP y unos 400 estudiantes se enfrentaron cuando las fuerzas del orden, con gases lacrimógenos y tanquetas, desalojaron a los alumnos, al cual habían ingresado por la fuerza en la mañana de ese día, deteniendo a seis policías. Los trabajadores administrativos y docentes expresaron su apoyo a la protesta estudiantil. El 18 de setiembre, la ANR dio un plazo de 30 días a las autoridades de la UNI para resolver la situación. El 15 de octubre, la ANR prolonga por 30 días más la investigación en la UNI. El 26 de octubre, un grupo de alumnos tomó el Rectorado con el propósito de impedir la sesión del Consejo Universitario que iba a discutir la suspensión de clases. El 28 de octubre, la ANR respaldó la gestión del Rector. El 4 de noviembre, más de 50 policías ingresó al campus para custodiar la reunión del Consejo Universitario. Desde el mes de noviembre, la UNI inició proceso administrativo disciplinario contra 35 estudiantes involucrados en la toma del local universitario. El 21 de enero se publicaron diversas Resoluciones Rectorales que dan cuenta de las sanciones impuestas a 23 estudiantes: 2 separados, 19 suspendidos y 2 amonestados. Los alumnos separados señalaron que se había vulnerado el debido proceso y solicitaron apoyo al Consejo Nacional para la Juventud, entidad que ha solicitado la intervención de la DP. En febrero, las autoridades de la UNI separan a 4 estudiantes más y, al mismo tiempo, inician proceso disciplinario a 74 alumnos más.</p> <p>Últimos acontecimientos. Mediante Resolución Rectoral N° 0222, del 6 de marzo, se suspendió a 5 alumnos más por su participación en hechos de violencia producidos el 11 de setiembre del año de 2004, cuando ingresaron a los dormitorios de la Residencia Universitaria sin permiso, ocasionando destrozos y llevándose efectos personales y bienes de la Universidad.</p>

18. CC Jicamarca, Ate, Lima	<p>Actores. CC Jicamarca y pobladores del anexo 18.</p> <p>Hechos. Los días 15, 19 y 21 de febrero, unas 150 personas ingresaron al anexo 18 de la CC Jicamarca con la intención de apropiarse de las tierras. Como resultado del enfrentamiento hubo quema de chozas, robo de enseres y heridos. Los pobladores atacados pidieron garantías a la Prefectura, la cual solicitó la presencia de la PNP (al parecer, este no llegó). El representante de los pobladores del anexo 18 pidió la intervención de la DP, la cual ha efectuado recomendaciones a la Prefectura y la Comisaría del sector.</p> <p>Últimos acontecimientos: El 2 de marzo, la Prefectura otorgó garantías personales y posesorias a Juan Aroni Pillaca, Presidente de la Junta de Administración del Local del Anexo 18 Carapongo Alto Matahuey de la CC Jicamarca. Las garantías posesorias fueron otorgadas sobre un terreno de 295 hectáreas (eriazos y accidentado) con límites y colindancias determinados, hasta que la autoridad jurisdiccional o administrativa competente de ser el caso resuelva el asunto.</p>
LORETO	
19. Jenaro Herrera, Provincia de Requena	<p>Magno Rogelio López Vela, Alcalde Distrital por Unidad Nacional (30.77% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece a UNIPOL (27.68%).</p> <p>Hechos. El Alcalde es juzgado por supuestos actos de corrupción, incumplimiento de funciones y denegación de información, y los regidores están siendo procesados por los delitos de peculado y malversación de fondos. La población exige su destitución. El Juez Mixto de Requena informó que, el 27 de julio de 2004, el Alcalde se puso a derecho en mérito al mandato de detención en su contra, dictado por la denuncia penal interpuesta por algunas regidoras, quienes además se encuentran con mandato de comparecencia. Por presión de la población rural, el Gerente Municipal y el Coordinador del Comité de Vigilancia Ciudadana coordinaron con la población para la realización del Presupuesto Participativo 2005; la población urbana está más interesada en la revocatoria. La DP recomendó al Concejo Municipal declarar la suspensión del Alcalde mientras dure su detención (conforme a ley) y que el cargo sea asumido por la Teniente Alcaldesa. Asimismo, recomendó emitir la Ordenanza respectiva para la elaboración del Presupuesto Participativo, con la finalidad de identificar y acreditar a los agentes participantes. Luego de visitar el distrito y entrevistar a autoridades y representantes de la sociedad civil, la DP prepara un Informe sobre restricción arbitraria al acceso a la información. También se solicitó al Prefecto, Fiscal Superior de Loreto y PNP que adopten las medidas preventivas del caso. El Alcalde se encuentra con mandato de detención y 3 regidores se encuentran con comparecencia. El 3 de agosto, la DP visitó la zona y se entrevistó con varios funcionarios municipales. El 17 de agosto, el Juez Mixto de Requena informó a la DP que se tomó la declaración instructiva al Alcalde, continuándose con el proceso penal. La población presentó memoriales pidiendo la intervención de la CGR, MiP, PJ, DP y Comisión Fiscalizadora del Congreso de la República, amenazando con tomar “la justicia con sus propias medidas” en caso no ser atendidos. La Corte Superior de Loreto respondió el 27 de diciembre. El MiP anexó el memorial recibido al expediente N° 2004-0053, seguido en contra del Alcalde por delitos contra la administración pública. Por su parte, la CGR Loreto respondió a los vecinos solicitándoles mayor documentación sustentada.</p> <p>Últimos acontecimientos. El 9 de marzo, el coordinador del Comité de Vigilancia Ciudadana presentó la denuncia ante el MiP en contra de la Alcaldesa encargada, Alcalde titular, regidores y funcionarios de la MD por delitos contra la administración pública. El día 15 se presentó la denuncia ante la CGR.</p>
20. Cahuapanas, Provincia de Alto Amazonas	<p>Oswaldo Peralta Rojas, Alcalde Distrital por Somos Perú (20.87% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece al MI Integracionista Alto Amazonas (19.87%).</p> <p>Cuestionamientos. El 28 de abril de 2004, el Alcalde y el Administrador Municipal fueron detenidos en el distrito de Cahuapanas, en territorio de la CN Santa María (perteneciente a la etnia shawi) por miembros de la CN Kaopan (etnia aguaruna). Los primeros reaccionaron y retuvieron a 30 nativos aguarunas para asegurar el respeto de su territorio, el estado de salud y la liberación de su autoridad edil. Luego de dialogar con los dos pueblos involucrados, se acordó conformar una Comisión de Fiscalización de la gestión municipal integrada por miembros de ambas comunidades. La población espera el Informe de la CGR. Se conformó el Consejo de Coordinación Local, en el que participan los dirigentes Jesús Cruz Rojas y Julio Huiñapi Tangoa, representantes de la Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Cahuapanas y de la Federación de Comunidades Chayahuitas del Sillay, respectivamente. También se realizó una asamblea con la población para elaborar el presupuesto participativo del distrito. Así mismo se ha designado al señor Ludvi Ignacio Silva Chanchari como funcionario encargado de brindar información. El Alcalde informó a la DP que se reunió con miembros de la CN Kaopan para discutir el tema de la Comisión de Fiscalización; acordaron reunirse con la CN Sillay para constituirla y elaborar un plan de trabajo. Con relación al informe de sus actividades, señaló que delegó esta tarea en el Secretario General de la Municipalidad, pero no cumplió a cabalidad. Entre el 15 y el 17 mayo, la DP visitó las CN de Kaopan y Santa María de Cahuapanas entrevistándose con <i>Apus</i> y brindando información sobre derechos de los pueblos indígenas. Luego de la visita, el Jefe de la Oficina de Contabilidad de la MD informó que el Alcalde visitará la zona para entregar materiales y reunirse con las CN, a fin de conformar el CCL e informar sobre la priorización concertada de proyectos de inversión. La DP recomendó publicar la información solicitada y comunicarla a los <i>Apus</i> de las CN. El día 16 de junio se reunió la Comisión de Fiscalización para evaluar la gestión municipal. El 22 de febrero, el administrador de la MD informó que se han brindado todas las facilidades al Comité de Fiscalización con la finalidad de que lleve a cabo su trabajo.</p> <p>Últimos acontecimientos. No hay información adicional.</p>

21. Pebas, provincia de Mariscal Ramón Castilla	<p>Actores. Alcalde Distrital José Cárcamo Maldonado y Comité de Defensa, Paz y Desarrollo de Pebas.</p> <p>Hechos. El 6 de diciembre de 2004, la MD emite la Resolución de Alcaldía N° 051, que declara a la entidad en emergencia administrativa por 90 días a raíz del proceso judicial seguido contra el Alcalde y algunos regidores por presuntos malos manejos de fondos municipales. El 5 de enero de 2005, el Comité de Defensa, Paz y Desarrollo de Pebas, reuniendo a unas 50 personas, se posesionaron del frontis del local municipal, demandando la destitución inmediata del Alcalde por presuntas irregularidades en el manejo de fondos municipales. La PNP se desplazó a la zona desde Cabalococha, Nuevo Chimbote e Iquitos, logrando que el grupo de oposición se retirara. Los dirigentes del Frente solicitaron la presencia de la CGR, MiP y DP; además solicitaron la destitución del Juez Mixto de Ramón Castilla y el bloqueo de las cuentas de la MD. La situación se ha polarizado por el apoyo brindado por el Frente de Defensa al Teniente Alcalde, mientras que los trabajadores municipales apoyan al Alcalde. El 11 de enero, personal de la DP visitó la localidad en la que se reunió con el Frente de Defensa. La PNP informó que se incrementó el número de efectivos para retirar a las 30 personas que ocuparon el frontis del local municipal. La MD funciona con limitaciones por el estado de emergencia administrativa, pues sólo presta los servicios de energía eléctrica, radiofonía, limpieza pública, Registro Civil, Programa del Vaso de Leche y mesa de partes. La Procuradora Anticorrupción se constituyó como parte penal en el proceso seguido contra el Alcalde, apelando el mandato de comparecencia restringida a favor de dicho funcionario.</p> <p>Últimos acontecimientos: La situación se mantiene en calma.</p>
22. Pastaza, provincia de Alto Amazonas	<p>Actores. Pueblo Indígena Candoshi y mestizos y colonos de Ullpayacu. Antecedentes. Los colonos y mestizos de Ullpayacu, capital del distrito de Pastaza, realizan labores de pesca ilegal en las cochas de las CN de la etnia candoshi lo que ha originado conflictos, hechos que han sido denunciados a las autoridades locales. Hechos. Población mestiza y colonos retuvieron a 10 miembros del Pueblo Indígena Candoshi, entre ellos el regidor de la MD Iwaki Simón Yanadari, al profesor Sundi Simón Camaranti y 8 alumnos secundarios. Estas personas fueron impedidas de abandonar el pueblo luego que, dos semanas antes, apareciera el cadáver del señor Flin Chino en el lago Rimachi (aparentemente miembro de una CN quechua) y que el señor Jorge Ríos fuera herido de bala (la población mestiza culpa de estos hechos a las CN Candoshi. Anunciaron que la retención duraría hasta que los Candoshi entreguen a los autores del homicidio y del ataque con arma de fuego. El 24 de noviembre llegó a la localidad la Fiscal Adjunto Provincial de Alto Amazonas acompañada por 5 policías para investigar los hechos denunciados. Esa noche, la Fiscal explicó a la población ubicada en el frontis de la MD las investigaciones que iba a desarrollar el MiP, lo que calmó los ánimos de la población. La Fiscal tomó manifestaciones, incluyendo a las personas retenidas. La Fiscal informó a la DP que habría identificado a los presuntos autores de los mencionados delitos, y que se acordó con los dirigentes nativos que los mismos serían trasladados a la CN Mushacarusha, donde serían recogidos por la PNP que, por razones de seguridad, los llevaría a San Lorenzo. El Alcalde informó a la DP que la situación volvió a la calma y los alumnos candoshi asistieron a su centro educativo, mientras que el regidor y el profesor se encuentran en la MD colaborando para que el conflicto se solucione.</p> <p>Últimos acontecimientos. No hay información adicional.</p>
23. Saquena (Bagazán), provincia de Loreto	<p>Manuel Pérez Sánchez, Alcalde Distrital por Alianza Electoral Unidad Nacional (15.38% votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece al partido Primero Perú (14.77% votos).</p> <p>Hechos. El 6 de febrero de 2005, miembros del Frente de Defensa de Bagazán, junto con algunos regidores, impidieron el regular funcionamiento de la MD. El día 17, el MiP informó que existen dos denuncias contra el Alcalde y otros funcionarios por delitos contra la administración pública; de igual forma, existe una denuncia contra los miembros del Frente de Defensa y algunos funcionarios municipales por delito de usurpación agravada y contra el patrimonio.</p> <p>Últimos acontecimientos: El 18 de marzo, comisionados de la DP visitaron la MD pero la encontraron cerrada. Pobladores de la zona refirieron que la MD no funciona desde diciembre, lo cual trae como consecuencia el recorte de energía eléctrica, servicio prestado por la MD. La situación permanece en calma, aunque los pobladores han expresado que permanecerán así si el Alcalde no intenta ingresar a la zona.</p>

24. Lagunas, Provincia de Alto Amazonas	<p>Ridel Padilla Sinarahua, Alcalde Distrital por Perú Posible (37.45% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor es del MI Integracionista Alto Amazonas (20.32%).</p> <p>Hechos. El 16 de abril, miembros del Frente de Defensa y Desarrollo de Lagunas – FREDEL, tomaron el local municipal exigiendo la presencia de la CGR para realizar una auditoría del manejo de fondos municipales. La población organizó piquetes para impedir el acceso al local. A pesar de los esfuerzos del Subprefecto de Alto Amazonas y del Fiscal Provincial Adjunto, no se logró un acuerdo. En la madrugada del 20 de abril, los piquetes del FREDEL fueron atacados por una turba de personas (posibles simpatizantes de Perú Posible), dejando un saldo de 41 personas heridas. El señor Germán Yuyarima Coachi fue derivado a Yurimaguas, y posteriormente a Lima, para ser tratado por un traumatismo ocular cerrado. Luego de los sucesos, una nueva comisión de autoridades, integrada por el Subprefecto, el Obispo de Yurimaguas y el Fiscal Provincial, logró que las partes se comprometían a no incurrir en actos de violencia. El 30 de abril, la DP visita Lagunas, donde exhortó a las partes a no incurrir en actos de violencia, y a esperar los resultados de las instancias correspondientes. Los representantes del FREDEL solicitaron a la DP realizar un seguimiento de las denuncias presentadas ante la PNP y el MiP. El 1 de junio, la CGR concluye el proceso de Acción Rápida iniciado el 22 de abril, emitiendo el Informe de Verificación de Denuncia N° 06-2004-CG/GDPC. Este documento fue remitido tres días después al Fiscal Provincial, quien denunció al Alcalde ante el Juzgado Mixto de Alto Amazonas por los delitos de falsedad ideológica y malversación de fondos. El Juez abrió instrucción contra el Alcalde, dictando mandato de detención, la que se hizo efectiva el 14 de junio. Del 11 al 13 de junio, la DP visita nuevamente la zona, exhortando a mantener la calma y a esperar el resultado de las investigaciones. Además, se recomendó al Fiscal de Alto Amazonas que amplíe la investigación policial, pues su atestado no individualiza a los presuntos autores de la agresión del 20 de abril, incluyendo sólo a los presuntos autores de los daños ocasionados al local municipal. Esta recomendación fue acogida por el magistrado. El 15 de junio, una sesión extraordinaria del Concejo Municipal designó al Teniente Alcalde como encargado de la MD mientras dure la detención del burgomaestre. El 16 de junio, el Fiscal Provincial llega a Lagunas para continuar las investigaciones sobre los hechos de violencia producidos. El 28 de junio, la directiva local del Perú Posible emitió un pronunciamiento solicitando al Teniente Alcalde, encargado de la Municipalidad, que decline su encargatura por no pertenecer a dicha agrupación. Ante la consulta efectuada por un dirigente de FREDEL, la DP recomendó no responder el comunicado para evitar provocaciones. Durante este tiempo, los regidores de Perú Posible se ausentaban constantemente de la zona, por lo que el Concejo Municipal no pudo sesionar para decidir la suspensión del Alcalde. La sesión programada para el 30 de junio no se realizó por falta de quórum. El 1 de julio, partidarios del Alcalde presentaron en Mesa de Partes un documento donde dicha autoridad solicita una licencia de 15 días por problemas personales. Simultáneamente, tres regidores presentan un escrito solicitando la realización de una sesión de Concejo para discutir este pedido. La DP recomendó convocar a sesión, discutir el tema e informar la decisión al JNE. Asimismo, solicitar la presencia de la Oficina de Control Interno en la sesión y pedir a cada jefe un reporte sobre el estado actual de cada Área. El Presidente del FREDEL informó que la sesión se realizó, pero el acta no fue firmada por dos regidores. El 23 de julio, simpatizantes del Alcalde detenido realizaron una marcha pidiendo que se le restituya en el cargo. No se produjeron enfrentamientos. El Presidente del FREDEL exigió sanciones a los culpables de corrupción y denunció que los regidores de la comuna no le permiten al Alcalde encargado realizar sus actividades con normalidad, pues a la fecha el Concejo Municipal no aprueba la suspensión del Alcalde. Informó que se ha enviado un memorial al JNE para que se pronuncie sobre la suspensión del Alcalde. La PNP está citando a diversos pobladores por los incidentes ocurridos en la MD. Asimismo, se ha dispuesto la detención de Guillermo Tihuay, miembro de Perú Posible, por incitar a la población a realizar actos de protesta. El 21 de setiembre, la Sala Penal de la Corte Superior de San Martín cambió la orden de detención por una de comparecencia restringida, por lo que el 24 de setiembre el Alcalde abandonó el centro penitenciario donde se hallaba recluso. La DP visitó la localidad para prevenir enfrentamientos. El 2 de octubre, representantes de 43 CN de los pueblos Cocama y Cocamilla, reunidos en Lagunas, pidieron sanción para el Alcalde. Este retornó el 26 de setiembre, y el FREDEL le otorgó un plazo de 72 horas para abandonar el distrito. El Alcalde se retiró anunciando volver con custodia policial. El 10 de octubre, la DP exhortó al FREDEL, Comité de Masacrados y dirigencia de Perú Posible a mantener la calma. Al Alcalde se le exigió prudencia, pues el PJ le ha fijado ciertas reglas de conducta. Las investigaciones judiciales por malversación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado concluyeron a mediados de enero de 2005, y el Juez (quien asumió el caso el 4 de enero de 2005) remitirá el expediente al Ministerio Público para el dictamen correspondiente. La DP está realizando un seguimiento de los expedientes, y ha recibido un pedido de apoyo de las CN cocamas que desean un médico que efectúe un reconocimiento del estado de salud de las víctimas de los sucesos de abril. El 23 de febrero, personal de la DP se reunió en Yurimaguas con dirigentes del FREDEL y las CN, brindándoles orientación legal sobre los procesos en los que están involucrados. La operación se repitió al día siguiente en Lagunas, donde dialogaron con representantes de la población; también constataron que el local municipal funciona, aunque el Alcalde no se encuentra en el distrito.</p> <p>Últimos acontecimientos. El 28 de marzo, el Juez Mixto de Alto Amazonas condenó a varios pobladores a pena privativa de libertad condicional por 3 años y el pago de una reparación civil de S/. 25,000; el Alcalde fue sentenciado a 4 años de pena priva de libertad condicional y al pago de S/. 35,000 de reparación civil. Ambas partes han apelado la sentencia.</p>
---	---

PIURA	
25. El Carmen de la Frontera, Provincia de Huancabamba	<p>Actores. Ananías Velásquez Torres, Alcalde Distrital por Somos Perú (20.71% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece a Perú Posible (19.37%). Rondas campesinas de Huancabamba, radios locales, empresa minera Majaz.</p> <p>Hechos. Desde el mes de abril de 2004, ronderos de Carmen de la Frontera consideran que el Alcalde está colaborando con la compañía minera Majaz. El 7 de julio, miembros de la CC Segunda Cajas instalaron una tranquera en la carretera que conduce de Sapalache a Carmen de La Frontera. La PNP investiga si dicha medida fue respaldada por la MD, pues de lo contrario atentaría contra el libre tránsito. Los ronderos informaron que ella tenía como finalidad prevenir y controlar la tala indiscriminada y el transporte de madera, y contribuir a la lucha contra el abigeato. Esta es una de las vías para viajar hasta el campamento de la minera Majaz. La población teme que el proyecto minero Río Branco, desarrollado por esta minera, genere impactos negativos en el medio ambiente. El 5 de mayo, autoridades regionales de Energía y Minas, autoridades locales y organizaciones campesinas acordaron la creación de un Comité Técnico al cual se le encargó recoger información técnica especializada sobre la actividad minera en el sector de Río Branco. La Comisión concluyó que la actividad minera no afectaría el medio ambiente. Posteriormente, como parte del acuerdo, se han conformado mesas técnicas especializadas en Desarrollo Social, Comunicaciones, Medio Ambiente. Esta última vigilará los estudios de exploración y de impacto ambiental. La Minera, en su intento por conseguir la licencia social de Ayabaca y Huancabamba, está dispuesta a dar participación a la población de los beneficios que obtenga con la explotación de recursos mineros, además el pago de canon. El estudio de impacto ambiental debe iniciarse el 1 de noviembre. El 20 de diciembre, en presencia de autoridades del lugar (Juez, Fiscal, Subprefecto, PNP), la Asamblea de rondas campesinas de Huancabamba acordó sancionar a “cadena ronderil” al locutor y dueño de Radio Centinela Düber Mauriola Labán, acusándolo de reclutar campesinos pobres para hacerlos aparecer como población que apoya a la empresa (y que habrían atacado en noviembre las instalaciones de Radio La Poderosa, del periodista Federico Ibáñez, la cual transmitía información favorable al medio ambiente y tribuna de los opositores a la actividad minera). El locutor Mauriola fue capturado el 27 de diciembre y cumplió su sanción durante tres noches. El 28 de diciembre, el Obispo de Chulucanas solicitó la intervención de la DP. Ese mismo día un grupo encabezado por dirigentes comunales favorables a la empresa minera, retienen por unas horas a la dirigente Josefa Ramírez en el local de Radio Centinela; luego de ser liberada, fue detenida con otras tres personas por la PNP bajo la acusación de secuestro. El 29 de diciembre, la DP llega a la zona y constató que la PNP había enviado refuerzos, se entrevistó con autoridades y visitó a las personas detenidas. Ese día, el Prefecto convocó a una reunión en la que participaron representantes de la Subprefectura, PJ, MiP, MuP, PNP, Iglesia Católica, rondas, MCLCP y DP. En ella se conformó una comisión integrada por el Prefecto, MiP y DP que iría a la CC Huancacarpa a encontrarse con el locutor retenido. Pero el viaje no se realizó porque la PNP informó, en la madrugada del 30 de diciembre, que esta persona regresaba a Huancabamba, a donde llegó a las 5:00 a.m. El 2 de febrero de 2005, la Segunda Sala Penal dispuso la libertad de Josefa Adrianzen y Federico Ibáñez, permaneciendo bajo comparecencia restringida. El día 4, ambos fueron puestos en libertad.</p> <p>Últimos acontecimientos. No hay información adicional.</p>
26. Valle del Chira	<p>Actores. Gobierno Regional de Piura y agricultores arroceros del valle del río Chira.</p> <p>Hechos. El 7 de junio, la Administración Técnica del Distrito de Riego de Chira emitió la Resolución Administrativa N° 175, mediante la cual prohíbe emplear el recurso hídrico del reservorio de Poechos debido a la escasez de agua por causa de la sequía, impidiendo de esta manera la realización de la “campana chica de arroz” propuesta por los agricultores. El 30 de junio, el Consejo Regional confirmó dicha prohibición extendiéndola hasta noviembre, y disponiendo que la Dirección Regional de Agricultura promueva la siembra de cultivos alternativos. El 10 de agosto, los agricultores del valle de Chira tomaron la Panamericana Norte a la altura de Mallaritos - Samán e Ignacio Escudero, aislando la provincia de Sullana, para solicitar que el Gobierno Regional reconsidere la Ordenanza 043 y permita sembrar arroz en la campana chica. El 11 de agosto, el Gobierno Regional convocó una reunión con la presencia de varias autoridades (represas de Poechos y San Lorenzo, Dirección Regional de Agricultura, Autoridad Autónoma de la Cuenca, Defensoría del Pueblo) y de la Junta de Usuarios del Bajo y Medio Piura para explicar los alcances de dicha Ordenanza basándose en las proyecciones de abastecimiento de agua, e insistir en la producción de cultivos alternativos. Posteriormente, el Consejo Regional se reunió nuevamente con los arroceros (esta vez en Sullana) acordando reducir considerablemente el área de cultivo. Sin embargo, esta solución no ha sido del agrado de otras Juntas de Usuarios, que han iniciado protestas por lo que denominan un “retroceso en los avances” de la Ordenanza Regional.</p> <p>Últimos acontecimientos. No hay información adicional.</p>

<p>27. Suyo, Provincia de Ayabaca</p>	<p>Jorge Huanca Merino, Alcalde Distrital por Somos Perú (26.22% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece a Perú Posible (25.49%).</p> <p>Hechos. Desde el año 2002, pobladores reclaman por una presunta alteración del resultado de las elecciones en las que el actual Alcalde venció a Segundo Telmo Guerrero Zegarra (Perú Posible). Se aduce que el Acta Electoral de la Mesa N° 015570, ubicada en el Centro Educativo Inicial N° 104, fue suplantada en el Centro de Cómputo de la ODPE en la ciudad de Ayabaca. Al día siguiente, el personero legal de Perú Posible presentó un pedido de impugnación al JEE de Ayabaca un pedido de impugnación. El 25 de noviembre de 2002, esta instancia, mediante Resolución N° 229-2002-JEE, valida los resultados; sin embargo, al día siguiente, el mismo JEE denuncia ante el MIP los presuntos hechos delictivos suscitados en la ODPE Ayabaca en los que se habría alterado la mencionada acta. El 13 de diciembre de 2002, mediante Resolución 972-2002-JNE, el JNE declara infundado la impugnación presentada por Perú Posible. El 19 de enero de 2004, la Segunda Sala Mixta de Sullana concluye que existió alteración de resultados, condenando a Fernando Vargas López, entonces Jefe de la ODPE Ayabaca. Perú Posible interpone ante el JNE un Recurso Extraordinario de Revisión solicitando la rectificación de los resultados electorales del año 2002. El 1 de abril, el JNE desestima el pedido aduciendo "la irrevisibilidad de las decisiones emitidas por el JNE". Los primeros días del mes de junio se inician las protestas mediante plantones y vigiliass en la Plaza de Armas, frente al local municipal, exigiendo la salida del Alcalde. El 16 de junio, la protesta se tornó violenta, resultando 2 personas detenidas y 12 heridos, siete de los cuales son miembros de la PNP, todos por contusiones o asfixia (la PNP disuadió a los manifestantes con bombas lacrimógenas y armas de fuego). También se causaron daños a la propiedad pública y privada. El 3 de junio, personal de la OD Piura viaja a Suyo y exhorta a los pobladores a no cometer actos de violencia; se compromete a revisar el caso y, de ser pertinente, remitir recomendaciones al JNE. El 9 de junio, representantes de los pobladores se reunieron en Lima con el Defensor del Pueblo y el congresista Jhony Peralta; como resultado, el 15 de junio el Defensor del Pueblo remite el Oficio N° DP-2004-293 al JNE, recomendando la revisión del caso en consideración a la sentencia del PJ. El 16 de junio, la Comisión de Gobiernos Locales del Congreso invitó al JNE y a la DP a tratar el tema, pero esta no se realizó por la juramentación de nuevos magistrados del JNE. El 17 de junio, personal de la DP estuvo en Suyo para conocer los hechos de violencia suscitados. Se visitó a las personas detenidas y se recomendó que se les realizara el reconocimiento médico legal respectivo; se conversó con la población y sus dirigentes, llamándoles a esperar con tranquilidad la decisión del JNE. También se dialogó con el Alcalde y se visitó a los heridos civiles y de la PNP. El 25 de setiembre, mediante Resolución N° 190-2004-JNE, el JNE confirmó la permanencia del Alcalde en el cargo. El JNE convocó a consulta popular de revocatoria de autoridades en el distrito para el 3 de julio de 2005.</p> <p>Últimos acontecimientos. No hay información adicional.</p>
<p>28. Huancabamba, provincia de Huancabamba</p>	<p>Actores. Valentín Quevedo Peralta, Alcalde Provincial por Poder Industrial Campesino (17.74% de los votos) y Emma Cruz Félix Arrieta, regidora, Asociación de Ganaderos, CC Quispampa, Club de Madres del Barrio La Villa.</p> <p>Hechos. En febrero de 2005, la población señaló irregularidades en la Licitación Pública N° 002-2004/CEA/MPH, destinada a la adquisición de productos para el Vaso de Leche; por ello, solicitaron al Concejo Municipal que anulara el proceso antes de la suscripción del contrato correspondiente. Ante la negativa del Alcalde, la Asociación de Ganaderos convocó a un paro el 21 de febrero, en el cual tomaron carreteras y puentes, exigiendo además, entre otros aspectos: vacancia del Alcalde, destitución de funcionarios municipales, autonomía de la UGEL Huancabamba, asfaltado de la carretera Canchaque – Huancabamba. El 20 de febrero, un día antes del paro, la DP llega a la zona, y al día siguiente solicita al Alcalde copia del Procedimiento de Licitación Pública y participar en la reunión con los organizadores del paro. En la reunión, la DP explicó el procedimiento de selección del producto, adquisición y distribución del producto, y enfatizó que la toma de carreteras afecta el derecho a la libertad de circulación, por lo que constituye un delito. Al concluir el diálogo, se suscribió un acta con, entre otros, los siguientes acuerdos: de existir causal de vacancia, sería informada al Concejo Municipal y al JNE; la DP elaborará un informe sobre el proceso de licitación; retiro de confianza a funcionarios implicados; ejecución de proyectos 2003-2004 en el presente año presupuestal. La población aceptó levantar el paro.</p> <p>Últimos acontecimientos. No hay información adicional.</p>

PUNO	
29. Asillo, Provincia de Azángaro	<p>Antolín Huaricacha Huaricacha, Alcalde Distrital por Trabajemos por Asillo (17.53% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece al Movimiento Nueva Izquierda (13.04%).</p> <p>Hechos. Los días 10 y 11 de mayo de 2004 se realizó un paro contra el Alcalde. Se tomó el local municipal, se lacraron las puertas y una comisión (integrada por un Consejero Regional, el Subprefecto y dos regidores) designó al regidor Eusebio Condori para que asuma las funciones del Alcalde. Este convocó a sesiones de Concejo en los centros poblados de Sillota y Progreso para no ser vacado. Ante ello, los dirigentes han invitado al Alcalde a retornar al distrito para dialogar. La oposición exige que la autoridad facilite la documentación que debe ser revisada por la CGR. El 11 de julio, el Alcalde se reunió con la población, acordando realizar el deslacrado del local municipal los días 17 ó 18 de julio, diligencia que no se efectuó. El 22 de julio, la Fiscalía Provincial de Azángaro, junto con el Alcalde, dos regidores y el Teniente PNP Julio César Terán deslacraron el local municipal, el cual empezó a operar desde la fecha. El Jefe de la CGR en Puno visitó el distrito para una primera intervención y programar la visita de personal de la CGR de Lima. Dicho funcionario constató que las oficinas de Tesorería y Contabilidad no funcionaban y que la documentación contable estaría en poder del contador. Ante ello, dejó un documento para que el Alcalde informe a la CGR cuándo funcionarán dichas oficinas y el lugar exacto donde se encuentra la documentación contable; con ello podrá realizarse la acción de control. El 4 agosto, el Jefe de la Oficina Regional de Control visitó la MD y verificó que funciona normalmente, excepto las áreas de Tesorería y Abastecimiento, y que la documentación sustentatoria del movimiento económico se encontraba en la ciudad de Juliaca a cargo del Contador de la MD. En carta del 13 de agosto, la OD Puno exhortó al Alcalde a tomar las medidas necesarias para que las mencionadas oficinas funcionen en el plazo más breve y que la documentación sustentatoria de los gastos efectuados se encuentre físicamente en el local municipal, requisito necesario para realizar la acción de control. El Gobernador del distrito informó que desde mediados de agosto el Alcalde no se encuentra en el distrito. La OD Puno ha ofrecido mediar en el diálogo. El 21 de noviembre, pobladores del CPM Progreso llegaron a la MD buscando al Alcalde; al no encontrarlo (estaba en Lima gestionando, con otros Alcaldes, el trazado de la carretera transoceánica), los pobladores retuvieron a una regidora y al Gerente Municipal y los condujeron al local comunal del CPM, a unos 15 Km. de la capital del distrito. El Subprefecto de Azángaro visitó la zona, pero no pudo conseguir la liberación de ambos funcionarios, aunque comprobó que estaban bien de salud. La DP se comunicó telefónicamente con el Alcalde, quien anunció su retorno para el miércoles 24; mientras tanto, el asunto será visto por personal de la MD. También señaló que entregará el presupuesto solicitado. El 25 de noviembre, se realizó una reunión con participación de 50 dirigentes del centro poblado de Progreso, autoridades locales y el Alcalde, en la cual se acordó reponer el presupuesto de la irrigación y la posterior liberación de los rehenes. El 17 de febrero, los pobladores iniciaron una paralización indefinida, demandando la salida del Alcalde y los cinco regidores. El día 21 realizaron una marcha en Puno; además se concertó una reunión con autoridades provinciales y dos representantes del JNE, quienes informaron sobre los procedimientos de la revocatoria. El día 24, dos personas (topógrafo municipal y un efectivo de seguridad del Alcalde) fueron retenidas por la población, aunque después fueron liberados. El 24 de febrero, la CGR publicó la resolución en la que, basándose en el Informe Especial N° 031-2005CG/ORPU que examinó el período enero 2003 – junio 2004, encuentra indicios razonables de la comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, colusión, peculado y contra la fe pública.</p> <p>Últimos acontecimientos. El 1 de marzo, el Procurador Público llegó a Asillo para formalizar la denuncia contra el Alcalde. El día 7, un sector de la población se realizó una protesta con bloqueo de la carretera solicitando la inmediata detención del Alcalde. El día 8, RENIEC comprobó las firmas entregadas por los representantes de Asillo y envió su confirmación positiva al JNE, el cual incluyó al distrito de Asillo en el proceso de revocatorias. Durante marzo, se ha abierto proceso legal contra 7 personas: cinco con mandato de detención (entre ellas el Alcalde) y dos con comparecencia restringida, acusados por peculado, colusión, contra la fe pública en modalidad de falsedad ideológica y omisión de funciones. El 10 de marzo, pobladores de Asillo capturaron al Alcalde, poniéndolo a disposición de la PNP. El día 21, la Sala Penal confirmó el mandato de detención dictado por el Juzgado. La población no quiere que ninguna autoridad asuma la conducción municipal hasta el día de las revocatorias. El registro civil es la única oficina que funciona en la MD.</p>
30. Unicachi, provincia de Yunguyo	<p>José Coarita Yapachura, Alcalde Distrital electo por Movimiento Político Unión Regional para el Desarrollo (37.42% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece al Partido Aprista (21.28%).</p> <p>Hechos. El 2 de diciembre se produjo un incidente en el local de la MD sobre el cual las partes tienen versiones distintas. Los pobladores manifiestan que ese día el Alcalde los invitó a una reunión; lo estuvieron esperando durante una hora; poco después escucharon que en el exterior tocaban pitos y empezaron a ingresar al local personas desconocidas; decidieron cerrar el local por seguridad; poco después hace su aparición el Fiscal de Yunguyo en compañía de la PNP manifestando que se había producido el secuestro del Alcalde. Para los pobladores, se trata de una trampa urdida por el Alcalde para presentarse como víctima, pues hace tiempo le exigen transparencia en la gestión. De las 19 personas detenidas ese día, 13 han sido denunciados por el MiP por atentar contra la libertad personal del Alcalde. El 7 de diciembre se realizó una movilización en Yunguyo por las acciones tomadas por los jueces. El 23 de diciembre, las personas detenidas fueron puestas en libertad, aunque siguen con orden de comparecencia.</p> <p>Últimos acontecimientos. No hay información adicional.</p>

SAN MARTÍN	
31. Chazuta, provincia de San Martín	<p>Demetrio Saurín Apagueño, Alcalde Distrital por el MI Ideas (19.16% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece al Partido Aprista (18.92%). El Alcalde enfrenta un proceso de revocatoria liderado por Isaac Tangoa y Edinson Mendoza (ambos de Perú Posible) quienes lo acusan por no rendir cuentas sobre su gestión.</p> <p>Hechos. En julio de 2004, la población impidió el traslado de computadoras de la Asociación Central de Productores de la Microcuenca Bajo Huallaga que contenían información sobre el manejo económico de la cooperación internacional, reteniendo de paso a 6 trabajadores que luego fueron liberados sin daño alguno. La población reclamó también por la paralización de la construcción del tramo de la carretera Shilcayo-Achinamiza (CHEMONIC y DEVIDA indicaron que esperaban el estudio de impacto ambiental pues la zona sería declarada de reserva). La DP alentó la conformación de una Mesa de Diálogo, que se reunió el 25 de julio con representantes de DEVIDA, CHEMONIC, Prefectura, GR, FONCODES y el Comité de Lucha de Chazuta. En este encuentro se acordó, entre otros aspectos: construir la carretera, en cumplimiento del Convenio Marco entre la MD de Chazuta y DEVIDA (si el gobierno nacional no asumía el estudio de impacto ambiental, lo haría el GR); presencia inmediata de CHEMONIC y DEVIDA para informar sobre su gestión; intervención de la CGR en la MD (a partir del 15 de agosto); anular el CCL por no haber sido conformado de acuerdo a ley; elaborar el Perfil de proyecto de titulación de bosques comunales. La población levantó su medida de lucha. El 15 de agosto, representantes de DEVIDA, CHEMONIC y Constructora Lincoln, el Alcalde de Chazuta y representantes de los CPM de Yucanayacu y Tununtunumba firmaron el Acta de entrega del terreno donde se iniciará la construcción y rehabilitación de la carretera afirmada Chazuta – Shilcayo. Mientras tanto, el Comité de Lucha de Chazuta presentó una denuncia contra el Alcalde por malos manejos económicos, lo que ha motivado la intervención de la CGR. El Alcalde no pudo ser revocado el 17 de octubre. La población se mantiene en calma, aunque permanece descontenta porque el Alcalde sigue sin ejecutar obras. Durante la tercera semana de febrero, el Alcalde no realizó la rendición de cuentas ofrecida a la población; la DP ha recomendado una nueva fecha y que la convocatoria se realice con 30 días de anticipación, adjuntando un cronograma.</p> <p>Últimos acontecimientos. La situación se mantiene en calma. El Subprefecto informó que no se ha fijado fecha para la audiencia de rendición de cuentas.</p>
32. Huimbayoc, provincia de San Martín	<p>Elías Campos Pezo, Alcalde Distrital por el Partido Aprista (27.24% de los votos), obtuvo 4 regidores El quinto regidor pertenece a Somos Perú (21%). También son cuestionados el Tesorero Municipal y el Secretario Municipal.</p> <p>Hechos. La población de este distrito tomó el local municipal impidiendo el tránsito del Alcalde. Las exigencias de la población son: renuncia irrevocable del Tesorero Municipal (perdió un cheque de 4,000 soles) y del Secretario Municipal (nombró al Tesorero); informe sobre el dinero recaudado por alquiler de tractor y devolución inmediata del mismo; rendición de cuentas de la gestión edil; intervención de la CGR para investigar presuntas irregularidades del Alcalde. El 26 de julio, la DP participó en una asamblea comunal donde brindó orientación sobre los alcances de la renuncia irrevocable, derechos laborales del trabajador nombrado, procedimiento para destitución, rendición de cuentas y mecanismos para canalizar sus peticiones. También se exhortó a la población a deponer su medida de lucha ante el compromiso del Alcalde de realizar la rendición de cuentas y la renuncia voluntaria del Tesorero. La propuesta no fue aceptada debido a que el Presidente del FRECIDES San Martín ofreció traer a la CGR el 28 de julio. En dicho acto también se recomendó al Alcalde iniciar procedimiento administrativo contra el Tesorero por las presuntas irregularidades cometidas, independientemente del proceso judicial iniciado. El 27 de julio, la DP informó a la CGR Moyobamba sobre los hechos suscitados y se recomendó que se programe una visita a la zona. Esta gestión fue informada el mismo día al Comité de Lucha, al cual se le volvió a exhortar a deponer sus medidas de protesta. Luego que el 30 de julio el Alcalde visitara la OD San Martín, los pobladores levantaron su medida de protesta el 2 de agosto, con lo que la MD pudo reanudar sus actividades y la población quedó a la espera de la rendición de cuentas programada para el 8 de agosto y la intervención de la CGR. La rendición de cuentas casi concluye abruptamente cuando el Alcalde se negó a presentar copia documentada de la misma, tal como había sido acordado por la Mesa de Solución el 31 de julio. Tras la recomendación de la DP, el Alcalde aceptó entregar este documento luego de la reunión. Al no cumplir su ofrecimiento, la población toma nuevamente la MD. El Alcalde informó que no sacó copias por carecer de petróleo para el funcionamiento de la única fotocopidora del distrito. El 14 de agosto, la DP sugiere al Presidente del FRECIDES deponer su medida de lucha para que la CGR actúe con las garantías del caso. El 19 de agosto, por gestión de la DP, una comisión de la CGR, acompañados por un representante de la Prefectura, visitaron Huimbayoc para recoger información sobre presuntas irregularidades en la gestión edil. Ese día se levantó la toma de local municipal, por lo que las actividades se desarrollan con normalidad. El FRECIDES informó que, a pesar del compromiso del Alcalde, el concurso público para seleccionar Contador Municipal no contó con la presencia de representantes del Ministerio del Interior y de la sociedad civil, y que para la plaza se habría elegido al hermano de un regidor. Aún no se ha seleccionado nuevo Tesorero Municipal, por lo que el anteriormente elegido sigue en funciones a pesar de los cuestionamientos.</p> <p>Últimos acontecimientos. El Alcalde no permanece en el distrito, sino en Tarapoto; no ha convocado a concurso para ocupar la plaza de Tesorero.</p>

2. CONFLICTOS LATENTES

AMAZONAS

33. Provincia de Utcubamba

El 4 de marzo de 2004, el Presidente del Frente Cívico por la Democracia y el Desarrollo de la provincia de Utcubamba (FRECIDE), presentó un pedido de vacancia del Alcalde Provincial, José Luis Novoa Flores (de la agrupación Energía Comunal Amazónica). El 9 de marzo, el Concejo Municipal suspende en funciones al Alcalde mientras dura la detención domiciliaria ordenada por el PJ (Instrucción N° 481-2003) por supuesto delito de peculado. El 15 de marzo, el pedido de vacancia fue acogido en sesión de Concejo por 10 votos a favor y 1 en contra. El Alcalde apela al JNE, que acepta su recurso (Resolución N° 096-2004-JNE) el 18 de mayo. Las decisiones del JNE y del PJ son cuestionadas por FRECIDE, organizaciones productivas y rondas campesinas que, el 24 de mayo, realizan un paro regional. El 26 de mayo, FRECIDE organizó una reunión con autoridades y organizaciones sociales de Utcubamba acordando rechazar la Resolución del JNE, solicitar el pronunciamiento del GR, la intervención fiscalizadora del Congreso y celeridad al PJ. El 23 de junio, la DP revisó los procesos penales seguidos en el PJ de Utcubamba contra el Alcalde, por los delitos de peculado, malversación de fondos, contra la fe pública, falsedad ideológica y otros. La MuP logró ampliar la denuncia penal contra el Alcalde incluyendo los presuntos delitos de concusión, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir en agravio de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos de Utcubamba (EMSEU). A fines de octubre, algunos miembros del FRECIDE son procesados por el presunto delito de resistencia a la autoridad con motivo de la protesta realizada a comienzos de año. El PJ ordenó la detención domiciliaria del Alcalde y del ex Gerente de la mencionada empresa, a quien luego se le cambió el mandato de detención por comparecencia. El 31 de agosto, el JNE designa como Alcalde Provisional al Teniente Alcalde. El 27 de octubre, la DP viajó a Bagua al ser informada que el Alcalde suspendido había reingresado al local municipal, y que grupos de pobladores rodearon la MuP. La DP, el párroco, y el Fiscal Provincial convencieron al Alcalde de abandonar el local, hecho que se produjo a bordo de un vehículo policial que fue apedreado por los manifestantes, sin daños personales. El 11 de noviembre se volvió a ordenar la detención domiciliaria del Alcalde suspendido. El 14 de noviembre, el Teniente Alcalde sufrió un atentado contra su vida que le ocasionó graves lesiones a su salud, por lo que fue trasladado de emergencia a Chiclayo. El 21 de noviembre, el Alcalde suspendido se puso a derecho. El 22 de noviembre se realizó una marcha pacífica por la "no violencia" por las calles de la ciudad. A fines de noviembre el Consejo Provincial declara fundada la vacancia definitiva del Alcalde. El 15 de diciembre, la CGR dispuso la ejecución de una acción de control a la MuP. Anteriormente, entregó su Informe Especial N° 262 que encuentra indicios de irregularidades en la contratación de diversos servicios durante el período investigado (2001 – 2003). En enero, el Alcalde, que continúa con detención domiciliaria, apeló ante el JNE la declaración de vacancia decretada por el Concejo Municipal; no se han presentado movilizaciones de protesta, a pesar de la incomodidad entre los pobladores por las declaraciones del Alcalde. Las vacancias de un alcalde y dos regidores provinciales y de otros cuatro alcaldes y dos regidores distritales serán analizadas y resueltas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en audiencia pública del próximo martes 29 de marzo.

ANCASH

34. Ciudad de Huaraz

La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Manolo tomó uno de los locales de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo exigiendo la reorganización interna de este centro de estudios debido a irregularidades de carácter administrativo cometidas por directivos (teniendo al Rector como mayor protagonista) y alumnos integrantes de los órganos de gobierno. El 31 de octubre, por mediación de la Mesa por la Concertación y Gobernabilidad, autoridades y alumnos se reunieron y acordaron promover dicha reorganización. El 19 de noviembre, en una Asamblea Universitaria, se aprobó la reorganización, pero no se definieron los mecanismos para realizar el proceso, por lo que los estudiantes decidieron continuar con la toma del local exigiendo la presencia de la ANR. La protesta continuó, pero las clases se realizaban parcialmente. El 13 de diciembre, el Primer Juzgado Penal de Huaraz realizó una inspección judicial en el local universitario, en el proceso seguido contra algunos alumnos por delito de usurpación agravada y hurto agravado; en dicha diligencia, el Juez dialogó con los alumnos que se encontraban dentro del recinto universitario y ante su negativa de colaborar, solicitó la intervención de la PNP que empleó proyectiles lacrimógenos para dispersar a los alumnos. Luego de la salida de los estudiantes, el Juez entregó el local al Vice Rector, ordenando que la PNP resguarde el frontis. Durante y después de la diligencia judicial se produjeron enfrentamientos entre alumnos y PNP. La DP intentó persuadir a los alumnos a mantener la calma, sin resultado alguno. Para evitar consecuencias lamentables (el local universitario es colindante con un centro de educación inicial), recomendó el repliegue de la PNP, luego del cual los alumnos ingresaron nuevamente al local central de la universidad. En estos hechos no se reportaron detenciones ni personas heridas. El 17 de diciembre, la ANR designó una comisión *ad hoc* integrada por los Rectores de tres Universidades (Tingo María, Huacho y Los Ángeles de Chimbote, este último muy cuestionado) que presentó su informe el 21 de

enero de 2005, el cual desestima las denuncias de irregularidades académicas y administrativas. El 24 de enero concluyó su labor y se espera la presentación de su informe. La DP ha recibido quejas por la presunta vulneración del derecho de defensa de los 14 alumnos que vienen siendo procesados; ante ello, la DP está analizando los expedientes, se ha reunido con la jueza encargada y emitirá las recomendaciones correspondientes. El 25 de enero, la ANR, mediante Resolución N° 766, interviene la Universidad, suspende el ejercicio de funciones del Rector, Vicerrector y Decanos, y conforma una Comisión de Orden y Gestión con atribuciones de Asamblea Universitaria y Consejo Universitario, dándole un plazo de 90 días para adecuar las normas internas de la UNASAM, evaluar al personal docente y administrativo, revisar la currícula de cada carrera, y efectuar una auditoría integral. El PJ abrió instrucción a 14 personas que habrían participado en la toma del campus universitario, ordenando comparecencia restringida, sujeta a reglas de conducta y pago de una caución solidaria de 200 nuevos soles. Luego de la suspensión del Rector, Vicerrector y Decanos, la ANR, se han reanudado las clases.

AREQUIPA

35. Majes, Provincia de Caylloma

En mayo de 2004, adjudicatarios de parcelas de la Irrigación Majes protestaron por la adjudicación de sus tierras a nuevos propietarios de lotes urbanos. Las partes, incluyendo AUTODEMA, entienden que la solución depende de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Las protestas se incrementaron desde inicios de junio: una serie de plantones frente a la MuP impidieron el normal cumplimiento de labores. El problema se agravó porque el Alcalde desconoció los límites del CPM La Colina. El Prefecto convocó a una reunión con autoridades el 11 de junio, que se frustró por inasistencia del Alcalde. La reunión se realizó el día 14 con asistencia de los Alcaldes en conflicto, y representantes del MiP, PNP, AUTODEMA, DP, adjudicatarios afectados y agricultores colonos. Se acordó cesar los actos violentos, suspender los plantones, y esperar la decisión judicial sobre la jurisdicción del CPM La Colina. Los Alcaldes acordaron reunirse el 21 de junio para discutir soluciones. Por otro lado, el 16 de junio se reunieron la Comisión de Gobiernos Locales del Congreso, el Presidente Regional de Arequipa, el Alcalde de Majes y la Superintendencia de Bienes Nacionales, para encontrar una salida a la transferencia de lotes urbanos. El 7 de julio, en la madrugada, un grupo de personas ingresó en los terrenos ocupados por colonos (los colonos ocupan este espacio luego de adjudicaciones hechas por el Alcalde, las mismas que son cuestionadas). El enfrentamiento no produjo daños personales. La PNP y el Fiscal Provincial Mixto de Castilla iniciaron las investigaciones correspondientes. La PNP incrementó su personal en el sector para prevenir nuevos enfrentamientos. El 12 y 16 de noviembre la Superintendencia de Bienes Nacionales emitió las resoluciones N° 087-2004/SBN-GO-JAD y N° 088-2004/SBN-GO-JAD con las que aprobó una transferencia patrimonial predial gratuita a favor de la MD de 364 predios de propiedad del Estado. El 1 de diciembre el Alcalde Distrital, Víctor Huarca Usca, programó la subasta de lotes urbanos, pero pobladores lo impidieron alegando que el proceso no contaba con aprobación del Concejo. Se ha formado un Comité de Lucha y Defensa del Patrimonio e intereses de Majes cuyo objetivo es evitar la venta de estas propiedades. El 6 de diciembre algunos pobladores tomaron el local municipal en ausencia del Alcalde. El 13 de enero se publicó la ley N° 28466, que revierte al Estado los terrenos urbanos que se adjudicaron a AUTODEMA en 1984, siempre que no hayan sido afectados. El Alcalde despacha normalmente. Se instaló una comisión de la CGR para investigar supuestas irregularidades en la gestión edil. Hay calma en Majes y el Frente de Defensa se encuentra vigilante de las investigaciones y a la espera de los resultados.

AYACUCHO

36. Provincia de Cangallo

Eduardo Oscar Tineo de la Cruz, Alcalde Provincial (Partido Aprista), es cuestionado desde abril de 2004 por el Frente de Defensa de Cangallo porque habría iniciado la remodelación del palacio municipal sin expediente técnico ni autorización del Concejo Provincial. Dicho Frente convocó a un paro provincial e intentó tomar el local. La Prefecta de Ayacucho viajó a Cangallo y verificó que existe malestar en la población este hecho, pero que las amenazas de toma de local se han disipado. Luego de concluir la remodelación del palacio municipal, el Alcalde organizó una ceremonia de inauguración y mitin, que contó con la presencia del líder aprista Alan García. A esta concentración, según la prensa, habrían asistido jefes y funcionarios de diferentes entidades públicas empleando vehículos oficiales. El Frente de Defensa y los residentes en Ayacucho han criticado estos hechos.

37. Carapo, provincia de Huancasancos

El Alcalde Román de la Cruz Rojas (Movimiento Regional por el Desarrollo e Integración de Ayacucho) es cuestionado porque habría desarrollado obras sólo en su anexo de origen (Porta Cruz), despertando, a partir de marzo del año 2004, descontento en otros anexos y, principalmente, en la capital del distrito. Tal autoridad fue amenazada con comunicados, pintas, cadenas a las puertas del local municipal y objetos de brujería. La DP coordinó con el Alcalde y el Frente de Defensa la realización de un evento de capacitación en gestión municipal y participación ciudadana, que se realizó el 14 de junio. El taller no ayudó a mermar las posiciones de ambos grupos, especialmente por la resistencia del gobierno edil. El descontento de un sector de la población, fundamentalmente

de área rural, persiste. El Ministerio de Educación aprobó la construcción de aulas en la Escuela de Carapo. Los pobladores han pedido al Ministerio que se efectúe dicha obra según lo aprobado, y no en el CPM Porta Cruz. También han pedido la intervención de la DP para solucionar sus diferencias con el Alcalde. La DP gestionará una reunión con el GR.

CAJAMARCA

38. Provincia de Cutervo

La población descontenta por la gestión del Alcalde Jorge Luis Paredes Guevara, pretendió sacarlo del cargo por la fuerza. En sesión de Concejo del 28 de abril de 2004 se optó por iniciar el proceso de vacancia. El 7 de junio se realizó una sesión de Concejo en la que seis regidores (de un total de once) solicitaron la reconsideración del pedido de vacancia, la cual no fue aprobada antes porque no se alcanzaron ocho votos a favor. A mediados de julio, los regidores de oposición pidieron la reconsideración de la solicitud de vacancia. Se realizó la Sesión Extraordinaria de Concejo en la que exigía la documentación sustentatoria de la denuncia, sin embargo esto no procedió ya que dos de los regidores que estaban propiciando la vacancia desistieron de sus pretensiones.

39. Provincia de Hualgayoc

El 2 de febrero de 2005, 200 personas de la población del Tingo se ubicaron en las inmediaciones de la compañía minera San Nicolás, impidiendo el libre tránsito de trabajadores, para exigir la remediación de zonas afectadas por la actividad minera. El día 4, se firmó en Bambamarca un acta que recogió las demandas y expectativas de la población. Luego, autoridades del MEM se trasladaron a El Tingo, donde se identificó posibles fuentes de contaminación en la cuenca del río Tingo-Maygasbamba. Al concluir la jornada, MEM y pobladores reunidos acordaron: volver a reunirse el día 22, en El Tingo, incluyendo a entidades involucradas en el tema (MEM, CONAM, DIGESA y ATDR); conformar una comisión para realizar la inspección de las condiciones ambientales de las operaciones mineras en la zona. Luego de la reunión, los ronderos levantaron su medida de fuerza, haciendo hincapié que de no cumplirse se procedería a reiniciar las acciones de protesta. El día 22 de marzo, como resultado de la reunión entre representantes de la población y autoridades, se conformó la Comisión que participará en las tareas de manejo de remediación de la zona. Los integrantes de esta Comisión, que pertenecen a la sociedad civil, serán capacitados en Lima para una mejor intervención en este proceso. El 30 de marzo se ha programado la próxima reunión, a ser llevada a cabo en Hualgayoc, para la discusión de temas relacionados a la intervención minera en la zona.

CUSCO

40. Maranganí, provincia de Canchis

El Alcalde Miguel Saraya Sinsaya (Frente Independiente Moralizador) convocó el 7 de julio de 2004 una asamblea extraordinaria para tratar el pedido de vacancia de su cargo. Los 5 regidores solicitaron que dicha reunión se realice en la Plaza de Armas y no en la MD. El Alcalde rechazó la petición al notar que miembros del Frente Unido de Defensa de los Intereses de Maranganí (FUDIM) habían traído una acémila. Sobre las acusaciones de nepotismo, informó que a solicitud del Director del C. E. N° 56025 el Concejo Municipal, con 4 votos a favor y una abstención, aprobó la contratación de su hermana. Sin embargo, 30 días después el contrato fue anulado. Por esta razón, el Concejo Municipal le impuso una suspensión de 60 días, mientras se espera la confirmación de la vacancia presentada al JNE. La PNP y la DP recomendaron al Alcalde cumplir la sanción para calmar los ánimos. El 19 de setiembre, unos 120 comuneros tomaron el local municipal para impedir el ingreso del Alcalde, a quien acusan de malversar los fondos municipales en obras fantasmas y el pago de personal no contratado. Se ha formado un comité de revocatoria. El 11 de octubre, mediante Resolución N° 205-2004-JNE, el JNE confirma la permanencia del Alcalde en el cargo.

41. Llusco, provincia de Chumbivilcas

El 31 de julio de 2004, pobladores del distrito tomaron el local municipal luego de una asamblea convocada por el Frente Único de Defensa de los Intereses de Llusco, en la que participó el Alcalde Andrés Abrigo Maque (Movimiento Nueva Izquierda) y sus regidores. Los pobladores pertenecen a la CC San Sebastián y exigen la vacancia del Alcalde acusándolo de no haber realizado obras con los ingresos del FONCOMUN y de no haber brindado un informe económico de su gestión. El 2 de agosto, la Fiscal Provincial de Chumbivilcas acudió a la localidad y constató el hecho. En dicha Fiscalía existe una denuncia por presunto peculado contra el Alcalde, presentada por el Frente de Defensa, el Presidente de la CC y el Tesorero Municipal. Por su parte, el Alcalde y 4 regidores denunciaron a los dirigentes del Frente y a la regidora Yeny Negrón para prevenir la comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, contra el patrimonio y contra los deberes de función. El MiP realizó una Audiencia de Prevención, sin lograr acuerdo alguno entre las partes. Un equipo de la DP viajó a la zona del 10 al 13 de agosto. Allí se entrevistó al Alcalde, Subprefecto y a representantes del MiP, PNP, dirigentes del Frente de

Defensa y pobladores. Luego, recomendó a la Fiscal Provincial y al Comisario adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de las autoridades y la población. El 22 de agosto, la DP, con presencia del Prefecto y un representante de la ONPE, se reunió con ambas partes por separado. Se acordó realizar el 1 de setiembre una reunión pública en el distrito contando con la mediación de las mencionadas instituciones. La población desocupó el local comunal pero no se ha producido ningún acuerdo. El Alcalde continúa en el cargo. Los dirigentes han sido denunciados por los hechos sucedidos.

HUANUCO

42. Molino, provincia de Pachitea

La población cuestiona al Alcalde Distrital de la localidad de Molino, César Luis Eugenio Carlos, por la construcción de un mercado, hotel y restaurante municipal, así como por el alquiler de un volquete y cargador frontal a personas privadas. Se cuestiona también la transmisión de películas pornográficas en el canal municipal. Se reclama por la no ejecución de obras en la localidad de Huarichaca. Finalmente se menciona que el Alcalde no rinde cuentas a la población y no atiende las peticiones de los ciudadanos. El 28 de mayo de 2004, mientras se realizaba un cabildo abierto en la Plaza de Armas de Molino, un grupo de pobladores lanzó tomates, huevos y piedras al estrado. La PNP dispersó a las aproximadamente 700 personas asistentes con bombas lacrimógenas. Dicha autoridad ingresó al local municipal, cuyas ventanas fueron apedreadas. Finalmente, el Alcalde escapó vistiendo uniforme policial para no ser reconocido. Luego de los hechos, el MiP inició una investigación. El Fiscal Provincial Mixto también recibió una denuncia contra el Alcalde. El 7 de junio, el distrito amaneció con pintas que, empleando las siglas PCP, amenazaban de muerte al Alcalde y sus regidores. La DICOTE – Huánuco está realizando las investigaciones respectivas. El 18 de julio, la DP informó a la población del CPM Huarichaca de las actuaciones realizadas (intervención de la CGR, seguimiento de la investigación fiscal). Luego de esa reunión, la DP ha solicitado a la MD brindar la información solicitada por la población de Huarichaca. La población de este CPM mantiene un ánimo beligerante contra el Alcalde, pese a lo cual la MD labora normalmente. Durante febrero, no se ha registrado ningún incidente; una presunta incursión terrorista en contra del Alcalde ha sido desestimada. La CGR ha informado que ha previsto realizar una acción de control en la MD durante el 2005, la misma que también ha sido solicitada por el MiP.

JUNIN

43. Ondores, provincia de Junín

La CC Ondores (unos 3,000 comuneros) y la SAIS Túpac Amaru (15,000 comuneros aproximadamente, agrupados en 15 CC) sostienen un largo enfrentamiento por la posesión del predio Atocsayco (22,000 Has). En 1970, la Reforma Agraria formó la SAIS Túpac Amaru, integrando como socias a varias CC. En 1979, la CC Ondores decide separarse y solicita la devolución de sus tierras, incluyendo el fundo Atocsayco (el cual les había sido adjudicado en 1970 luego de un juicio iniciado en 1958 contra la Cerro de Pasco Copper Corporation). El 6 de setiembre de 1979, el Juzgado de Tierras les otorga la posesión, pero la SAIS apela y desaloja violentamente a los comuneros de Ondores. El 12 de setiembre de 1986, otra resolución judicial ordena restituir el predio a la CC Ondores. El 29 de marzo de 1996 ello se formaliza con la inscripción de su título de propiedad (saneado por el PETT) en los Registros Públicos de Huancayo. Pero el 12 de enero de 1999, el Ministro de Agricultura, acogiendo una solicitud de la SAIS, declara nula la resolución que aprobó el plano de Ondores. El año 2002, la Corte Suprema volvió a fallar a favor de la CC Ondores, pero no se ejecutó la sentencia por la oposición violenta de la SAIS. Actualmente se siguen tres juicios en Lima y uno en Junín. El 14 de octubre de 2004, el Gerente de la SAIS solicitó garantías personales y posesorias ante el Subprefecto de Junín, la que fue desestimada el 15 de diciembre luego de la constatación policial. El Subprefecto envió informes a la Prefectura el 18 y 23 de diciembre, sin obtener respuesta. El 21 de diciembre de 2004 se programó una audiencia de conciliación entre las partes, que no se realizó por la inasistencia de los representantes de Ondores; dicha diligencia se reprogramó para el 13 de enero de 2005. El 31 de diciembre de 2004, unos 300 comuneros de la CC Ondores ocuparon a la fuerza el Fundo Atocsayco, produciendo daños materiales y dos personas muertas. El 3 de enero de 2005, el MiP y la PNP realizaron una inspección en el lugar. El asesor legal de la SAIS Túpac Amaru pidió la intervención de la DP y la celeridad del proceso judicial pendiente en el Juzgado Mixto de Junín; se comprometió también a evitar enfrentamientos. El 6 de enero, un equipo de la DP visitó la zona para iniciar una investigación. La Fiscalía denunció por robo agravado, usurpación agravada e interrupción de las comunicaciones a miembros de la CC Ondores. Sus dirigentes señalaron que permanecerán en la zona hasta que se pronuncie el Poder Judicial. El 7 de enero se realizó una reunión con participación de representantes de la SAIS, CC Ondores, PNP, Prefecto y MiP. Al no llegar a un acuerdo sobre la devolución del predio, los representantes de la SAIS se retiraron sin suscribir un acta, señalando que tomarían medidas. El 20 de enero se realizó una inspección judicial en el proceso seguido contra comuneros de Ondores.

44. Anexo Alto Unine, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo

El 9 de noviembre de 1999, representantes de la Asociación Agroindustrial Ganadera Juan Santos Atahualpa denunciaron a un grupo de personas por delito de usurpación de terrenos. Después de las investigaciones, el Juez

Mixto de Satipo condenó a Cristhian Aldunate Rivera, dirigente de los segundos, a dos años de pena privativa de la libertad. La sentencia fue apelada, pero el 30 de marzo de 2004 la Sala Mixta Descentralizada de La Merced la confirma, por lo que dispone el lanzamiento de las personas que ocupan los terrenos de la Asociación. En noviembre del mismo año, en cumplimiento de la sentencia judicial y con apoyo de la PNP, se intentó desalojar a la Asociación Agroindustrial Alto Unine. En el acto se produjo un enfrentamiento con el resultado de dos muertos y un herido. El 6 de diciembre, la DP promovió una reunión en la que participaron instituciones públicas involucradas en el problema de tierras (Agencia Agraria, PETT, INRENA, PNP, autoridades locales y prensa), en la que se acordó convocar por separado a los grupos en conflicto para proponerles fórmulas de conciliación. También se planteó que la MD Río Tambo elabore un Plan de Emergencia para solucionar, con el PETT, otros problemas similares. El 13 de diciembre, DP y MD se reunieron con la Asociación Alto Unine, y al día siguiente con la Asociación Juan Santos Atahualpa. Ambas partes aceptaron reiniciar el diálogo. El 16 de diciembre la DP y el Comisionado por la Paz y el Desarrollo realizaron una visita conjunta al Anexo. La DP está recogiendo información (propiedad, posesión, concesión forestal) sobre los terrenos materia de conflicto, la cual es aportada por las partes y las instituciones involucradas.

LA LIBERTAD

45. Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco

El 13 de junio de 2004, el Alcalde Pedro Roldán Rodríguez (Somos Perú), presuntamente presionado por algunos pobladores, organizó un cabildo abierto para informar que, ante la falta de servicios básicos en la localidad, las empresas contratistas de la Minera Barrick Misquichilca trasladaron sus oficinas a Huamachuco. La población responsabilizó al Alcalde por este traslado e intentó agredirlo, por lo que tuvo que refugiarse en la Comisaría. El Alcalde había solicitado al Gobernador garantías para el cabildo el día sábado 12 de junio en horas de la noche, por lo que dicha autoridad denegó el pedido. La MD dejó de brindar atención durante varios días. Refuerzos policiales llegaron al distrito desde las Comisarías de Shorey y Santiago de Chuco, y el Fiscal se hizo presente. El 24 de junio, a mediodía, se reabrió el local municipal y se dispuso el peritaje de obras efectuadas en la jurisdicción, las cuales habrían sido sobrevaluadas. Los pobladores han expresado que no permitirán el retorno del Alcalde cuestionado. No se produjeron nuevos incidentes, pero el Alcalde trasladó su despacho al caserío Shorey Chico, a 6 Km del local municipal, y formuló denuncia penal contra los responsables de la toma de local. La investigación preliminar solicitada por el Fiscal no encontró indicios de irregularidades por parte del Alcalde. Desde agosto, la MD trabaja con normalidad. Pese a la recomendación de la DP, los dirigentes no han presentado ante la CGR y/o el MiP las pruebas sobre los actos presuntamente irregulares del Alcalde; por ello, la CGR no puede intervenir. El 23 de agosto, el Alcalde retomó su despacho en el local municipal de manera pacífica, en donde viene ejerciendo sus funciones. El 27 de agosto, un grupo de pobladores trató de agredir al Alcalde fuera del local municipal, siendo detenidos por la PNP. El 31 de agosto, el Fiscal Provincial de Santiago de Chuco informó que la investigación preliminar ordenada por su despacho ha sido archivada por no haberse logrado determinar la responsabilidad del Alcalde. El 18 de noviembre, 6 de los 8 presidentes de barrios ofrecieron su apoyo al Alcalde y propusieron la conformación de la Mesa Distrital de Concertación para la Lucha contra la Pobreza cuya instalación se ha programado para el 26 de noviembre. La atención administrativa se realiza con normalidad.

46. Carabamba, provincia de Julcán

El descontento por la gestión del alcalde Luis Trujillo Guevara dio inicio a un proceso de revocatoria promovido por la Asociación Distrital de Defensa de los Intereses de La Libertad. El 18 de diciembre de 2003 el Alcalde fue denunciado penalmente por el delito de peculado. El parte policial del 27 de febrero de 2004 concluye que no existe delito, por lo que la denuncia se declara infundada el 1 de marzo. Se interpuso queja de derecho y se eleva el expediente al MiP que, el 16 de marzo, confirmó la Resolución anterior y archiva definitivamente la denuncia. El Alcalde pretendió ejecutar una sentencia contra el CLAS Agallapampa (provincia de Otuzco) por una suma aproximada de 37,000 nuevos soles. La sentencia afectaría el funcionamiento de seis establecimientos de salud a cargo de dicho CLAS. Esta demanda no tuvo la defensa correspondiente de parte del CLAS, pues el Alcalde fue despedido por haber cometido irregularidades en su labor como médico. La sentencia fue consentida y los ex directivos del CLAS no apelaron. Dos intentos de conciliación fueron frustrados por el Alcalde que no aceptó el pago fraccionado de la deuda establecida en la sentencia judicial. La DP informó al Juzgado Provincial Mixto de Julcán que una medida de ejecución forzada afectaría directamente el servicio público que brindan los establecimientos de salud, cuya cobertura alcanza los 23 mil usuarios. Así mismo, señaló la inconveniencia de ordenar un embargo pues los bienes administrados por el CLAS Agallapampa son bienes afectos a un uso público, por lo tanto son de dominio público. La DP informó a la población del distrito sobre el derecho al voto en el proceso de revocatoria. El 17 de octubre no se logró revocar al Alcalde y a dos regidores cuestionados. La denuncia por el delito de peculado fue archivada por el PJ.

47. Huaranchal, Provincia de Otuzco

Un sector de la población cuestiona la gestión del Alcalde Distrital Aristides Ovidio Alvarado Rodríguez (Alianza para el Progreso), por supuesta falta de transparencia, así como presunto enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y peculado. El Presidente de la Asociación de Huaranchalinos residentes en Trujillo y el Presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Huaranchal informaron a la DP sobre enfrentamientos anteriores entre seguidores del Alcalde y pobladores descontentos con la gestión edil, con la secuela de algunos heridos de consideración. En primera instancia, el Juzgado Provincial Mixto de Otuzco determinó, mediante Resolución UNO del 7 de junio de 2004, no abrir instrucción penal contra el Alcalde por el presunto delito de peculado (Instrucción N° 322-04). El 22 de junio, luego de la apelación del Fiscal Provincial Mixto de Otuzco, el expediente fue remitido a la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. El 9 de julio el expediente fue derivado a la Fiscalía Superior para el dictamen correspondiente. La DP informó a la población sobre el estado del proceso. El 3 de agosto, la Segunda Fiscalía Superior Penal formuló denuncia ante el PJ. Se produjo un enfrentamiento entre pobladores y seguidores del Alcalde. El Juzgado Provincial de Otuzco resolvió no iniciar instrucción contra el Alcalde, resolución que ha sido apelada. La Segunda Fiscalía Superior Penal opinó que la apelación no es procedente, y derivó su dictamen a la Segunda Sala Penal para que resuelva.

LAMBAYEQUE

48. Provincia de Chiclayo

El 28 de abril de 2004, luego del desalojo de comerciantes del Mercado Modelo, los comerciantes informales secuestraron 20 minutos al Gerente de Servicio de Saneamiento de la MuP, exigiendo la paralización de los trabajos de remodelación en las inmediaciones del mercado. También intentaron tomar el local municipal. Semanas después, los comerciantes informales ocuparon nuevamente las calles de las que fueron desalojados. El 7 de junio, la DP recomendó al Alcalde convocar al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana para tratar el tema. La Cámara de Comercio conformó una Comisión Multisectorial integrada por Colegios Profesionales, Defensa Civil, MuP, comerciantes y DP. La Comisión evaluó la problemática y planteó alternativas de solución. Como los comerciantes continuaron ocupando las calles adyacentes al mercado Modelo, los trabajos de remodelación fueron paralizados. La MuP no intentó un nuevo desalojo pues se comprometió a no hacerlo hasta que la Comisión presente su informe final. Este fue presentado el 30 de agosto. Una de sus sugerencias principales fue la reubicación de los comerciantes informales en un plazo de 90 días. El 13 de setiembre, la MuP creó una Comisión de Regidores encargada de implementar las recomendaciones formuladas en el informe de la Comisión Multisectorial. Mediante Resolución de Alcaldía N° 1010-2004, la MuP dispuso la reubicación del comercio informal adyacente al Mercado Modelo. El 7 de enero de 2005, el Alcalde, Arturo Castillo Chirinos (por Acción Popular) convocó a una reunión de la Comisión Multisectorial para comunicar la propuesta de reubicación de los comerciantes informales elaborada por la Comisión de Regidores. Allí se acordó otorgar un plazo de 72 horas a los comerciantes informales para que inicien este proceso, pues de lo contrario serán desalojados. Los comerciantes informales declararon inaceptable esta decisión y solicitaron la ampliación del Mercado y la formalización de los comerciantes; también realizaron marchas de protesta por las la ciudad manifestando su rechazo a la reubicación. La MuP no ejecutó ninguna acción de desalojo; por su parte, la Federación de Comerciantes Ambulantes de Lambayeque inició, en febrero de 2005, el proceso de asignación a sus miembros de lotes de terreno en el proyecto del futuro mercado "Sergio Choquehuanca Santos", cumpliendo de esta manera con una de las recomendaciones sugeridas por la Comisión Multisectorial.

49. Cayaltí, Provincia de Chiclayo

La disputa por el control de la Empresa Agroindustrial Cayaltí produjo, en febrero de 2004 enfrentamientos entre los propios pobladores. El 28 de mayo, el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo instaló, con apoyo de la PNP y presencia de la DP, al Directorio de la empresa, bajo la presidencia de COFIDE. Unos 60 accionistas minoritarios protestaron, pero fueron dispersados por la PNP. Cuatro personas fueron detenidas durante la protesta y posteriormente liberados. El 15 de junio, unas cien personas desalojaron de las instalaciones de la Empresa Agroindustrial Cayaltí al Directorio instalado por mandato del PJ. Al día siguiente, aproximadamente 500 trabajadores y pobladores de Cayaltí ingresaron a las instalaciones de la empresa y desalojaron al grupo opositor a COFIDE. No se produjeron heridos y la PNP solicitó el apoyo de más efectivos. La empresa se encuentra a cargo de COFIDE. Al haberse aplicado la suspensión perfecta de labores por parte de la Dirección Región de Trabajo – Lambayeque a un promedio de 522 trabajadores de la empresa que no firmaron el Acuerdo Conciliatorio propuesto por COFIDE, el Centro de Salud de Cayaltí – EsSalud les habrían restringido la atención médica como asegurados de EsSalud, lo que originó su protesta ante COFIDE. Dicha situación fue superada a raíz de las gestiones realizadas por la DP ante EsSalud - Lambayeque. A la fecha, los enfrentamientos por el control de la Empresa Agroindustrial Cayaltí han cesado y la actividad que viene desarrollando COFIDE en dicha empresa se viene ejecutando de manera normal.

LORETO

50. Provincia de Ramón Castilla

La población de Caballococha solicitó al Alcalde Marino Oswaldo Chávez Pérez (Frente Popular Agrícola FIA del Perú) la destitución de su Asesor Legal y del Procurador Municipal, porque estarían encubriendo a Guido Marcelo Pinedo, trabajador municipal y presunto autor del homicidio de Ernesto Rivero Vásquez (22). Según la versión oficial, este falleció tras ahogarse en la quebrada Palo Seco; sin embargo, la necropsia muestra un golpe en la región occipital de la cabeza y diversas lesiones en el cuerpo. La población dio un plazo hasta el 5 de noviembre de 2004 para efectivizar esta demanda. Al no obtener respuesta, la población saqueó el local municipal y dañó los hostales municipales, resultando once personas heridas (tres de ellas evacuadas a Iquitos). El 6 de noviembre, el Fiscal Superior Decano y el Director de la V Dirección Territorial PNP se desplazaron a la zona, restablecieron el orden interno y conversaron con la población. El 7 de noviembre, comisionados de la OD Loreto, en reunión con la población y dirigentes del Frente Patriótico, exhortaron a la tranquilidad y brindaron información sobre mecanismos y derechos para fiscalizar la gestión del Alcalde. El Alcalde anunció una sesión de Concejo para el 9 de noviembre en la que trataría la destitución de los funcionarios cuestionados. En su lugar, emitió una Resolución suspendiendo el funcionamiento administrativo y la prestación de servicios (con excepción de limpieza, agua y televisión municipal) hasta que existan garantías plenas para el desempeño de las actividades institucionales y/o que los daños ocasionados sean constatados por una comisión de alto nivel. El 10 de noviembre, el Alcalde declaró a la prensa que contestará la agresión. La población expresa su malestar porque no se están cumpliendo los acuerdos tomados en la reunión multisectorial realizada el 15 de noviembre en la cual se sugirió al Alcalde la destitución de los funcionarios cuestionados.

51. Maquía, Provincia de Requena

En mayo de 2004, el Concejo Municipal y la población comenzaron a expresar su malestar por el proceder del Alcalde Distrital, Víctor Román Estrada Villacrés (Partido Aprista Peruano), acusándolo de no realizar obras, no rendir cuentas a través de un cabildo, no sustentar el destino de los recursos, entre ellos una donación efectuada por la V Región de Defensa Civil, falsificación de firmas, y nepotismo. Desde el 17 de mayo, el Alcalde y la Regidora Carmela Cahuaza Mozombite (PAP) enfrentan una denuncia penal en trámite ante el Ministerio Público por los delitos de concusión y corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho propio. El 6 de junio, tras una reunión en la localidad de San Roque, representantes de 70 comunidades tomaron el local municipal exigiendo la renuncia del burgomaestre. El 9 de junio, la Fiscal de Requena acudió a Maquía acompañada por efectivos policiales. A pesar de sus exhortaciones, no logró deponer la medida de fuerza, por lo que, al día siguiente, intervino la PNP para desalojar a los manifestantes, logrando que la MD volviera a funcionar. La Fiscal convocó a una reunión con el Alcalde para el 10 de junio, pero ésta no se realizó por inasistencia de dicha autoridad. Posteriormente, en sesión extraordinaria, sin la presencia del Alcalde ni de la Regidora Cahuaza, el Concejo Municipal acordó, por tres votos contra uno, la vacancia del primero, considerando que había incurrido en nepotismo. Como no existe proceso judicial en trámite sobre este delito, los regidores elevarán el acuerdo al JNE. La DP sugirió analizar el procedimiento de suspensión y estudiar la posibilidad de interponer denuncia penal ante el MiP por delito de nepotismo. El 13 de diciembre, el JNE designa como Alcalde provisional a Enrique López Tamani mientras dure el mandato de detención dictado contra el Alcalde.

52. Putumayo, Provincia de Maynas

La población tomó en enero el frontis de la Municipalidad pidiendo que la CGR se constituya en la zona e investigue al Alcalde, Víctor Raúl Reátegui Paredes (por el partido El poder de Putumayo) a quien acusan de no brindar información, de malversar fondos y de apropiación ilícita. La DP coordinó con la MuP, Prefectura y MiP, una visita de funcionarios de la CGR, la cual se realizó el 8 de enero de 2004. Por otro lado, se sugirió a un asesor municipal comunicar al JNE la inexistencia de gobierno local (aunque está en proceso las revocatorias, la población solicita contar con una autoridad). El 29 de marzo, la CGR emitió el Informe de Verificación de Denuncia N° 04-2004-CG/GDPC, el cual señala la existencia de indicios razonables de la comisión de los delitos de peculado, negociación incompatible con el cargo, falsedad ideológica y falsificación de documentos. El 8 de junio, el Diario *Pro & Contra* informó de un supuesto atentado contra el Presidente del Comité de Revocatoria del Putumayo, Edwin Pérez Álvarez, ocurrido el 7 de junio. La persona acusada fue Rolando Shimbo Pipa, nativo de la etnia Secoya, quien asistió a la dependencia policial para rendir su declaración. Ese día, un grupo de manifestantes, desde la plaza del distrito, amenazó al señor Shimbo (lo vinculan con el Alcalde), por lo que optó por permanecer en local, aunque el Comisario aclaró que sólo se encontraba en calidad de citado, y que su permanencia era voluntaria por motivos de seguridad. El señor Shimbo permaneció allí hasta el 12 de junio. La PNP Adscrita a la CGR derivó el Atestado N° 05-2004, con la investigación preliminar sobre la gestión del Alcalde, a la 4ª Fiscalía Provincial de Maynas, y ésta lo trasladó al Tercer Juzgado Penal de Maynas, el cual ordenó la detención del Alcalde. El 24 de junio, dicha autoridad fue internada en el penal de Iquitos junto con un regidor y un proveedor (el resto de regidores y dos funcionarios siguen prófugos). Como no puede sesionar el Concejo, el Alcalde encargó al Administrador Municipal la continuidad

de los servicios públicos. La Junta Vecinal de Defensa de los Intereses del Putumayo solicitó la intervención de la DP ante el JNE para que éste tome conocimiento del caso y constituya una comisión que visite la zona. El PJ, mediante Resolución N° 1, abre instrucción y ordena la detención del Alcalde y miembros del Concejo Municipal. Sin embargo, la Sala Penal de la dicha Corte cambia la orden de detención por una de comparecencia restringida. Esto motivó, el 20 de agosto, un enfrentamiento en la localidad de El Estrecho entre unos 25 pobladores (promotores de la revocatoria) y la PNP, luego que los primeros tomaran el local municipal por dos horas. Tres personas resultaron heridas (el Gobernador y dos efectivos policiales; uno de ellos perdió el ojo izquierdo tras ser golpeado por una piedra). El 21 de agosto, un Fiscal Adjunto visitó la localidad y abrió una investigación de oficio. La MD fue cerrada por la población el 9 de setiembre; durante el hecho se produjo un enfrentamiento con la PNP dejando 4 civiles heridos. El Concejo Municipal se reúne en el domicilio del Alcalde. El 19 de setiembre, la DP se reunió con los dos grupos en conflicto. En la reunión con los grupos de oposición, la DP se comprometió a realizar el respectivo seguimiento de los documentos presentados al PJ, MiP y CGR. Se les exhortó a deponer las medidas de fuerza para el normal desarrollo de las actividades y servicios municipales y que el Alcalde asuma el cargo; sin embargo, este grupo decidió continuar con su medida hasta la llegada de una comisión de CGR Lima. Al Alcalde se le sugirió no realizar sesiones de Consejo u otra actividad municipal en lugar distinto al local municipal. El Alcalde no pudo ser revocado el 17 de octubre. Dos días después, los promotores de la revocatoria incendiaron el local partidario del Alcalde. La situación fue controlada por la PNP. Dos personas heridas fueron evacuadas a Iquitos. El 26 de octubre, una comisión integrada por MiP, Prefecto, PNP y DP llegaron a la zona; en esta visita, el Presidente de la Junta Vecinal entregó documentación sobre la gestión edil. La población espera la revisión de la misma por parte de la CGR Iquitos. El 8 de marzo de 2005 la DP solicitó información a la Corte Superior de Justicia de Loreto respecto a los procesos en trámite que se siguen en contra del alcalde de la MD de Putumayo, regidores y funcionarios involucrados. El oficio está en seguimiento.

53. Trompeteros, Provincia de Loreto

En abril de 2004, los jefes de las CN de Trompeteros intentaron tomar el local de la MD exigiendo la destitución del Alcalde Distrital, Aldo Schrader Vargas (Perú Posible), por incumplimiento de promesas y supuestos malos manejos de bienes y recursos municipales. El 7 de mayo, los *Apus* regresaron a sus comunidades, indicando que en 8 días regresarían en mayor número para tomar medidas más drásticas. El 7 de junio, la OD Loreto informó a los *Apus* de las CN Santa Rosa, Pampa Hermosa, San José, Sauki, Jerusalén, Providencia, Siu y Pijuyal, sobre el seguimiento realizado a las investigaciones en curso en el PJ y CGR. Además, se realizaron coordinaciones con la Prefectura y el MiP, y se visitó la zona para informar sobre derechos, exhortar a la no violencia y supervisar la inspección ocular realizada por el Juez del Cuarto Juzgado Penal de Maynas, el Fiscal de Prevención del Delito y la Procuradora Pública Anticorrupción. El 10 de junio, los *Apus* de Trompeteros viajaron a Iquitos para exigir celeridad en las investigaciones. La CGR realizó un Examen Especial del período enero 2002 – diciembre 2003 en el cual se determinó la existencia de indicios de delitos contra la administración pública. Dicha investigación se integró al Atestado Policial N° 027-2004 de la Policía Adscrita a la CGR que fue remitido el 21 de julio a la Cuarta Fiscalía Provincial de Maynas. El Cuarto Juzgado Penal de Maynas informó a la DP que, en dicho proceso, los peritos remitieron la pericia contable, estando a la espera de la ratificación respectiva. También están pendientes las declaraciones de 4 personas, entre ellos el representante de PLUS PETROL en la zona. El 6 de agosto, la el MiP precisó que la Fiscalía Superior ha resuelto que el expediente sea remitido a la Fiscalía Provincial Mixta de Loreto – Nauta, en aplicación del principio del fiscal natural. Los *Apus* volvieron a Iquitos para exigir al PJ la captura e internamiento del Alcalde. El Juez Mixto de Loreto ordenó la detención del Alcalde. El 9 de noviembre, el Concejo Municipal lo suspende y encarga la administración de la comuna al Teniente Alcalde. El 23 de noviembre, el Alcalde fue detenido. Durante Enero, luego de la investigación realizada por CGR, se ha iniciado un proceso judicial contra el Alcalde, quien se encuentra internado en el Establecimiento Penitenciario de Iquitos, junto su asesor y el Administrador Municipal. El Fiscal Provincial Mixto informó que en el proceso por malversación de fondos, peculado y otros, se amplió el plazo de investigación por 60 días más.

PUNO

54. Provincia de San Román

Miguel Ramos Benique, Alcalde Provincial (MI Moral y Desarrollo) es cuestionado por organizaciones sociales encabezadas por la Central de Barrios desde el mes de enero. Acusan a la actual gestión municipal por supuesto incumplimiento de promesas electorales y no haber efectuado la rendición de cuentas. El año 2004, solicitaron el retiro de regidores por causales de vacancia y el despido de funcionarios de confianza que no son oriundos de la zona. Inclusive, han tomado el local municipal en una oportunidad.

55. Ciudad de Puno

Los estudiantes denuncian al ex Rector Juan Astorga de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) por nepotismo y malversación de fondos. Los días 21 y 22 de julio de 2004 convocaron a una paralización, realizándose enfrentamientos con la PNP; 11 personas fueron detenidas (puestas luego en libertad) y 5 fueron heridas de

levedad. La OD Puno supervisó el respeto de derechos de las personas detenidas y siguió el estado de los heridos. La Federación Universitaria solicitó la intervención de la ANR y de la CGR para investigar las denuncias de corrupción contra la administración anterior. El 31 de julio, con apoyo de la PNP y en presencia del MiP, se desalojó a los estudiantes del local administrativo del Rectorado; en esta acción se detuvieron otros estudiantes, que fueron puestos en libertad pero siguen siendo investigados. El 1 de agosto, cientos de estudiantes iniciaron una marcha de sacrificio hacia Lima para pedir la intervención del Congreso en la reorganización de su centro de estudios. Ya en Lima, se unieron a delegaciones de la UNT, Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Huánuco), UNI y La Cantuta para organizar una movilización conjunta. El 2 de agosto, estudiantes de la UNA fueron recibidos por un grupo de congresistas. El 5 de agosto, el Consejo Universitario acordó reiterar el pedido de declaratoria de emergencia académica con la finalidad de garantizar el semestre académico y autorizar a los Decanos a controlar la asistencia de docentes y el dictado de clases. En la Ciudad Universitaria las labores administrativas y las académicas se realizan de manera parcial. Ese día, una marcha de estudiantes intentó tomar el local administrativo de la UNA, sin lograr su objetivo. El 12 de agosto se convocó a un paro que fue apoyado también por algunas organizaciones sociales; hubo enfrentamientos con la PNP cerca de las instalaciones administrativas y se apedreó el local de la sede administrativa. El 21 de setiembre, la ANR declaró en "conflicto de legitimidad" a la UNA, dispuso el cese de sus autoridades y órganos de gobierno, designó una Comisión Transitoria con funciones de Asamblea y Consejo Universitario, y un Comité Electoral. Esta Comisión se instaló en la Universidad e inició sus labores. No se han reportado movilizaciones ni protestas contra su desempeño. La DP ha supervisado el desarrollo del examen de admisión, que se desarrolló sin problemas.

56. Kelluyo, Provincia de Chucuito.

El 13 de febrero se realizó una movilización contra el alcalde distrital Alejandro Vilcanqui Tarqui (por el partido Acción Popular) y sus regidores, a quienes se les acusa de malos manejos de los recursos de la MD e incumplimiento de obras en comunidades. El día 15, autoridades de la provincia (Subprefecto, Fiscal Provincial, DP, PNP y Gobernador) se reunieron con la población; allí el MiP se comprometió a realizar una investigación de oficio y solicitar una pericia contable. En otra reunión realizada el día 17 en Puno, se informó a los pobladores sobre los procedimientos legales para promover la salida de las autoridades. Por medio de Resolución N° 040-2005, el 9 de marzo el JNE incluyó al distrito de Keyullo, provincia de Chucuito, en la convocatoria a consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales efectuada mediante resolución N° 012-2005-JNE. El alcalde retoma su función en espera del resultado de la consulta.

57. Provincia de Melgar

La MuP fue cerrada por la población el 12 de abril de 2004. Ese mismo día, los regidores cuestionaron públicamente al Alcalde Ricardo Chávez Calderón (por el Movimiento independiente Primero Perú) por abuso de autoridad y por no entregar información solicitada. El PJ declaró inaplicable el acuerdo de Concejo Municipal que suspendió al Alcalde, la que no fue ejecutada esperando la decisión del JNE. No se produjeron enfrentamientos; más bien se realizaron reuniones de regidores con representantes de las Comisiones de Alto Nivel. Una medida cautelar, declarada fundada por el Juzgado Mixto de Melgar, dejó sin efecto la suspensión acordada en sesión de Concejo Municipal. Sin embargo, en forma paralela, otro Juez del mismo Juzgado declaró improcedente la Acción de Amparo presentada por el Alcalde. La decisión fue apelada y derivada a la Sala Civil de San Román. El 15 de julio, el Alcalde intentó reabrir la MuP, pues el MiP le entregó la custodia del local. A pesar de la presencia de un representante de la CGR, no se llevó a cabo tal ingreso, incumpliendo el acuerdo suscrito el 1 de julio en presencia del MiP y otras autoridades, en la que se acordó no tomar decisiones hasta que el PJ decida. Posteriormente, el Alcalde reasumió sus funciones. En el acto se agredió a algunos regidores y a un oficial PNP. El 23 de julio, el JNE expidió la Resolución N° 141-2004-JNE, declarando improcedente la suspensión del Alcalde planteada por siete regidores. La MuP funciona normalmente. El representante de la CGR en Puno realizó una visita al lugar, para luego programar otra de personal de la CGR de Lima. La DP se ha hecho presente en la zona en varias oportunidades para dialogar con dirigentes, pobladores e instituciones locales. Los regidores se han quejado que no los convocan a sesión. En setiembre, la CGR inició una investigación en la MuP. La MuP funciona, pero continúan las tensiones entre regidores y Alcalde, pues los primeros se quejan que los están dejando de lado. No hay información adicional.

58. San Gabán, provincia de Carabaya

El 19 de octubre de 2004 se produjo un enfrentamiento entre unos 300 efectivos policiales y cerca de 1,500 pobladores apostados desde el día anterior en las inmediaciones de la Hidroeléctrica de San Gabán en protesta por la erradicación forzosa de cultivos de coca que el Ministerio del Interior realizaba en la zona. El hecho causó 2 campesinos muertos y 10 más heridos de gravedad, que fueron trasladados al Centro de Salud de Ollachea (uno de ellos falleció días después). A mediodía, tras un diálogo entre agricultores y PNP, se permite la atención de los heridos en la posta médica y su traslado a Macusani. En la noche se realiza una reunión en este distrito donde se acuerda llamar al diálogo, pero se dispone el corte de la carretera y la movilización de piquetes a la Villa de San Gabán (que se despliegan al día siguiente en dos volquetes de la MuP). Las autoridades de Carabaya se reúnen en

Lima con autoridades del gobierno y del Congreso. El gobierno decreta el estado de emergencia en la zona y envía más efectivos policiales. La DP llega a la zona el 19 de octubre; en la visita se acompaña el levantamiento de cadáveres y se dialoga con representantes de los agricultores. Posteriormente, el gobierno nombra una Comisión de Diálogo que, luego de varios días de conversación, logra un acuerdo con los pobladores. El 25 de octubre se suscribe un acta de compromiso en la cual se acepta la erradicación progresiva de los cultivos de coca de carácter ilegal con participación de los agricultores. En noviembre hubo una movilización por la paz convocada por la MuP, Iglesia Católica y organizaciones sociales. Por su parte, la empresa denunció a los responsables de la toma del local. El 22 de noviembre, la Fiscalía denunció a 50 personas, incluyendo a los Alcaldes de Carabaya y San Gabán, por los presuntos delitos de "tentativa de homicidio en agravio de un policía y contra la tranquilidad pública". También se están denunciando a 6 PNP por "homicidio" y "lesiones seguidas de muerte" en agravio de 3 personas fallecidas, sin mención a heridos. La DP ha revisado los expedientes, y recomendó incorporar responsabilidades por heridos, por lo que el expediente ha vuelto a la Fiscalía (certificados médicos no han llegado al MiP). De otro lado, en cumplimiento del acuerdo suscrito, ENACO fue a San Gabán a comprar hojas de coca a los empadronados. Además, el Ministerio de Agricultura y el PETT visitaron la zona para evaluar las condiciones de la titulación. La Fiscalía ha ampliado la investigación pero aún no emite su dictamen. La Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Ayaviri patrocina la defensa legal de los representantes legales de los fallecidos y de los heridos. El 14 de diciembre, en Lima, se realizó una reunión de seguimiento de los acuerdos adoptados el 25 de octubre, con participación del Ministerio de Agricultura, GR Puno, DEVIDA, MuP Carabaya, ENACO, FONAFE, AGROBANCO, ELECTROPUNO, MD San Gabán, Ayapata y Corani, Ronda Campesina de Carabaya, productores de San Gabán, congresistas de Puno, Ministerio del Interior, Transportes y Comunicaciones, Salud, Superintendencia Nacional de Bienes. Se revisaron todos los temas y se acordó sobrevolar la zona en helicóptero para realizar una verificación muestral y aleatoria de las áreas cultivadas de hoja de coca en la provincia de Carabaya. Esta inspección se realizó el 17 de diciembre y fue determinante para suspender los operativos en la zona, motivo que ha permitido el retorno de la tranquilidad. El gobierno prorrogó el estado de emergencia por 30 días más. Los días 20 y 21 de febrero se realizó un encuentro de rondas campesinas de la provincia de Carabaya. Parte de la agenda consideró el seguimiento a los acuerdos alcanzados con el gobierno central; participaron también un asesor de la congresista Paulina Arpasi, Alcaldes Distritales, Alcalde Provincial, Presidente Regional, y representantes de ELECTROSUR, Vicaría de Ayaviri, DP, etc. En la reunión se acordó retomar la mesa de diálogo con las autoridades correspondientes. Las autoridades han decidido reanudar la mesa de diálogo, han convocado a una reunión para el día 28 de abril en Lima.

SAN MARTÍN

59. CPM Mariscal Castilla, distrito de Tingo de Ponasa, provincia de Picota

El 6 de junio de 2004, la población, reunida en asamblea general, acordó cerrar el local de la Municipalidad del CPM para impedir el ingreso del Alcalde Néstor Tuanama Putupaña y resguardar los bienes de la entidad. El 7 de junio, el Juez de Paz y el Teniente Gobernador invitaron al Alcalde a informar de su gestión. Como dicha autoridad no acudió, se abrió el local municipal para realizar un inventario de los bienes y se designó por aclamación como nuevo Alcalde de CPM al Teniente Alcalde. Al Alcalde se le acusa de haber vendido 180 calaminas del techo del Centro Educativo Inical N° 123, y de haber suscrito un contrato por 11,000 nuevos soles para la explotación de recursos maderables de un área de protección municipal, decisión tomada sin consultar a la población. También se menciona que no informó sobre el destino que se dio a los recursos obtenidos con ambas operaciones. No existen procesos judiciales contra el Alcalde cuestionado. El 8 de junio, efectivos de la PNP que llegaron a la localidad, solicitaron que las llaves del local municipal fueran entregadas al Alcalde destituido, sin lograr su propósito. El 14 de junio, la población evaluó las medidas a desarrollar para lograr que el Alcalde renuncie al cargo, previo informe sobre su gestión. El local de la Municipalidad del CPM abrió nuevamente al público. El Alcalde destituido denunció al Teniente Alcalde y a diez personas más por el delito de usurpación de funciones ante el MiP de Picota. El 3 de julio, INRENA realizó una visita de inspección al lugar donde se produjo la tala de árboles. Se levantó un acta de compromiso entre INRENA y la población para que los 26 árboles talados que aún permanecen en el lugar sean utilizados en beneficio de la población. El 5 de julio se realizó una sesión de Concejo para determinar el mecanismo de vacancia aplicable al Alcalde destituido. La OD San Martín mantiene comunicación telefónica con los pobladores de la localidad. La población está desarrollando sus actividades con normalidad, y el Teniente Alcalde sigue ejerciendo sus funciones de Alcalde encargado.

UCAYALI

60. Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo

Conflictos existentes entre 90 asentamientos humanos de la provincia de Coronel Portillo por la propiedad de terrenos, concluyeron en una movilización que dio lugar a actos de vandalismo en medio de una manifestación realizada el 13 de enero. Luego del diálogo propiciado por la DP con autoridades, dirigentes y CGTP, se conformó una Comisión Multisectorial que ha encauzado el problema y formulado propuestas de solución. No obstante, un

sector de la población solicita la reversión al Estado de los terrenos en disputa y su posterior adjudicación a los moradores. La DP recomendó al GR la creación de una Comisión Multisectorial con carácter ejecutivo, como plataforma de apoyo a la alternativa de conciliación. El 25 de junio, impulsada por el congresista Víctor Valdéz, se promulgó la Ley N° 28259, Ley de Reversión a favor del estado de los predios rústicos adjudicados a título gratuito, que establece que los predios rústicos declarados en abandono o que no hayan cumplido los fines para los que fueron gratuitamente adjudicados, revertirán al Estado. Esta medida ha tranquilizado a la población pues consideran que abre una solución al conflicto, por lo que esperan la elaboración del respectivo reglamento. Con el nuevo procedimiento para la reversión de predios, gran parte de los asentamientos humanos ha optado por hacer efectivo este derecho, presentando sus solicitudes ante la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali. Otro grupo de asentamientos humanos ha optado por la vía de la conciliación y posterior compra-venta de los terrenos, constituyendo para ello una Comisión integrada por los regidores de la MuP Coronel Portillo, Colegio de Abogados de Ucayali, Prefectura y dirigentes, los que han iniciado el proceso de negociaciones con los propietarios de los predios para su posterior formalización a través de COFOPRI. La DP, a pedido de los asentamientos humanos, acompaña el proceso. El 28 de enero de 2005, el Presidente Alejandro Toledo, con ocasión de la Sesión de Consejo de Ministros descentralizada realizada en Pucallpa, ofreció públicamente presentar un proyecto de ley de reversión a favor del Estado de predios otorgados a título oneroso, que al igual que los otorgados a título gratuito hayan incluido en causal de reversión. Durante el mes de marzo, la DP se encuentra monitoreando la consolidación del proceso; no ha existido mayor variación.

61. CN Chorinashi, Raimondi, provincia de Atalaya

Desde setiembre de 2003, 16 CN (Chorinashi, Jatitza, Azuaya, Santa Clara, Betijay, Alto Tamaya, Nuevo California, San Miguel de Chambira, Nueva Amazonía de Tomajao, Cametsari, Quipatsi, Mariscal Cáceres, Yamino, Sinchi Roca, Puerto Nuevo y Puerto Azul) cuestionan al INRENA y al PETT por temas de concesiones forestales y sobreposición de tierras de CN. La DP dialogó con las autoridades de las instituciones cuestionadas y con dirigentes indígenas regionales, luego de lo cual se conformó una Comisión de Trabajo que definiera una solución integral al problema detectado. A solicitud de la OD Ucayali, la Administración Técnica de Control Forestal de Coronel Portillo y Padre Abad informó de los avances en la determinación de las superposiciones denunciadas. Se han formado varias comisiones de trabajo con participación de INRENA, PETT, DP y organizaciones indígenas, en las que se están discutiendo varios temas: titulación de tierras, tala ilegal, superposición de concesiones forestales, etc. Hay avances en el proceso. INRENA está evaluando las concesiones forestales; por lo pronto, ha anulado una por incumplimiento de contrato. La CN Chorinashi considera que la concesión a Partes y Piezas SAC (parte del Consorcio Forestal Amazónico) se superpone con sus tierras. El caso está en el PJ. Un equipo de la DP visitó la zona la tercera semana de setiembre de 2004 capacitando a las CN en titulación, Convenio 169, derechos de los pueblos indígenas. Sigue pendiente la ejecución de la resolución de ministración provisional a favor del Consorcio Forestal Amazónico. La DP coordina de manera permanente con el PJ, PNP y organizaciones indígenas. ORAU propuso un viaje conjunto a la CN Chorinashi para recoger la posición de ésta ante la viabilidad de un diálogo con el Consorcio, solicitando la participación de la Defensoría del Pueblo como interlocutor. El PJ programó un nuevo desalojo para el 18 de febrero, que no se realizó. Dirigentes nativos regionales y nacionales solicitaron la intervención de DP y CONAPA. El 10 de febrero, una Mesa Multisectorial conformada por el Alcalde Provincial, Subprefecto y representantes de INRENA, GR y OIRA, visitó la CN para presentar la propuesta del Consorcio: reubicación de la comunidad en un terreno de libre disponibilidad con una extensión de 40,000 Has, y el compromiso de capacitar a la comunidad en manejo de bosques, cultivo de arroz y construcción de casas. La CN no aceptó la propuesta, y en su lugar planteó que el Consorcio se traslade al terreno ofrecido. También reclamaron al Ministerio de Agricultura la titulación del territorio. La empresa no aceptó la contrapropuesta. El GR Ucayali, en sesión del 17 de febrero, informó que buscaría una salida negociada al conflicto, para lo cual designó al Subgerente Regional destinado en Atalaya para conducir el diálogo. El 19 de febrero, una comisionada de la OD Ucayali visitó la provincia de Atalaya. Entre otras actividades, revisó los expedientes del caso y estableció diálogo directo con los actores involucrados. Durante el mes de marzo, la situación se mantiene en calma, se vienen estudiando vías de solución entre las partes.